

Katz, Friedrich

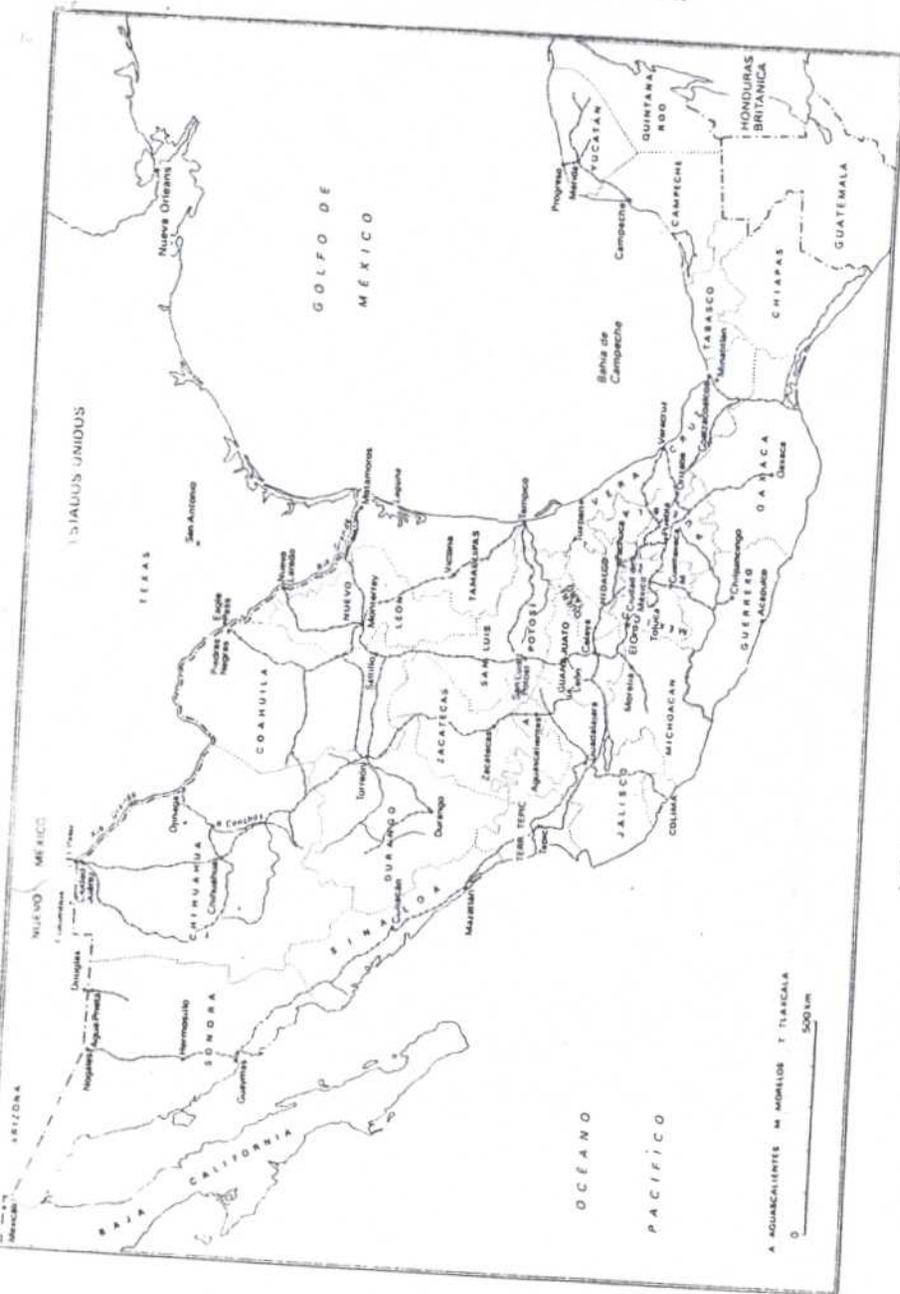
Capítulo I

MÉXICO: LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL PORFIRIATO, 1867-1910

LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA, 1867-1876

Las secuelas de la guerra

Los liberales que accedieron al poder en 1855, 34 años después de que México se independizara de España, esperaban poder dar a México la productividad y estabilidad de su vecino del norte, los Estados Unidos. Habiendo visto cómo su país perdía casi la mitad de su territorio frente a los Estados Unidos en la reciente guerra mexicano-norteamericana (1846-1848), temían que sin medidas en favor tanto del crecimiento económico como de la estabilidad política la existencia de México como Estado-nación independiente corriera un serio peligro. Su programa aspiraba a reemplazar los que consideraban los pilares inestables del viejo orden —la Iglesia, el ejército, los caciques regionales, los pueblos comunales— por una «estructura moderna». Fieles a su programa, comenzaron por debilitar la posición de la Iglesia, primero con una serie de leyes de reforma y después mediante la Constitución de 1857. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado; las cortes eclesiásticas perdieron gran parte de su jurisdicción; los matrimonios podían realizarse a través de una ceremonia civil; podía juzgarse a los clérigos en tribunales civiles; y se pusieron a la venta las tierras de la Iglesia. Por otra parte, también se privó al ejército de muchas de las prerrogativas que disfrutaba anteriormente. Al igual que la Iglesia, perdió sus privilegios judiciales. Los oficiales podían ser juzgados por tribunales civiles, y por primera vez en la historia de México, el jefe del Estado y la mayor parte de su gabinete eran civiles. Además, muchos de los antiguos caciques omnipotentes, que eran los pilares sobre los que se sustentaba el régimen conservador derrocado, y que durante tanto tiempo habían gobernado sus feudos locales con prácticamente total autonomía, fueron obligados a ceder el poder a hombres nuevos nombrados por los liberales. Con la adopción de la Ley Lerdo en 1856, los liberales habían lanzado un asalto no sólo contra la Iglesia sino también contra los pueblos comunales. La nueva ley prohibía a las instituciones eclesiásticas poseer o administrar pro-



México durante la Revolución

iedades que no estuvieran directamente dedicadas a usos religiosos y extendía la prohibición de propiedad corporativa a las instituciones civiles, con lo que abolía de hecho la tenencia comunal de la tierra. Las tierras poseídas de forma comunal tenían que ser vendidas. A partir de entonces, sólo podían poseer tierras los campesinos de forma individual o las sociedades y compañías privadas.

Los liberales esperaban que, con la eliminación del catolicismo como religión oficial, con la disminución del papel político de la Iglesia y con la destrucción de la base económica de su poder político, México, como los Estados Unidos, atrajera a inmigrantes europeos de todas las religiones. Estos inmigrantes constituirían, como en los Estados Unidos, una clase media agrícola que aseguraría el rápido crecimiento económico, la estabilidad política y el desarrollo de las instituciones democráticas. Además, contaban con que las disposiciones constitucionales que prohibían a la Iglesia y a las comunidades indias poseer tierras tuvieran efectos similares. Ambas instituciones iban a ser reemplazadas por una extensa clase de pequeños propietarios, que algunos líderes liberales esperaban que se convirtieran, como los inmigrantes, en los motores de la modernización, la estabilidad y la democracia en México. Aun en el peor de los casos, si ese desarrollo no llegaba a producirse, muchos liberales esperaban que al pasar la tierra de las «manos muertas» de la Iglesia a las «manos vivas» de una clase propietaria orientada al capitalismo, la consecuencia fuera un desarrollo económico considerable y una creciente estabilidad. Estos propietarios podrían no estar interesados en un régimen político democrático pero, al igual que la clase propietaria en Argentina, Brasil y Chile, exigirían cierta estabilidad política para poder asegurar el éxito de sus nuevas empresas comerciales. Al mismo tiempo, la destrucción del viejo ejército dominado por oficiales del régimen conservador significaría el fin de los golpes militares. Un nuevo ejército organizado por los liberales tendría una formación radicalmente diferente.¹

Cuando el presidente liberal, Benito Juárez, volvió a Ciudad de México en julio de 1867 después de la guerra contra los franceses, que había seguido a los tres años de guerra civil entre liberales y conservadores, la euforia del triunfo militar sólo pudo ocultar brevemente cuán lejos habían quedado los liberales de alcanzar las metas que se habían propuesto doce años antes. La ejecución de Maximiliano y, por tanto, la derrota de Napoleón III, hizo desaparecer por mucho tiempo el peligro de una intervención europea, y la supervivencia de México como nación independiente parecía asegurada. La Iglesia había perdido en gran parte su influencia económica y política en el país; los golpes de Estado de inspiración eclesiástica pertenecían al pasado. El viejo ejército conservador, tan inclinado a la indisciplina y la revuelta, por fin estaba disuelto. Los gobiernos regionales estaban bien asegurados en manos liberales; y se habían reducido en gran número las propiedades comunales de la tierra. Sin embargo, estos logros no produjeron los resultados esperados, ya que la expropiación de las tierras de la Iglesia no hizo surgir una clase de pequeños campesinos —como las propiedades se otorgaban al mejor postor, las adquirieron los propietarios locales más pudientes— y esto, muy a pesar de los liberales más radicales, no logró más que incrementar

1. Para un análisis detallado de la política mexicana entre 1855-1867, véase Bazant, *HALC*, VI capítulo 3.

la fuerza económica y la cohesión política de la clase dominante de ricos hacendados ya existente. El nuevo ejército liberal no aportó mayor garantía de estabilidad que el anterior conservador, ya que estaba formado por un grupo de soldados poco uniforme —en tropas regulares y guerrillas— a la cabeza de los cuales había jefes locales cuyo grado de adhesión al gobierno central era muy diverso y, además, era demasiado numeroso para las necesidades de un período de paz. Pero, si se mandaba a casa a los veteranos de dos guerras, sin dar recompensa adecuada a sus largos servicios, surgiría la amenaza de nuevas revueltas. A pesar del nuevo sentimiento de nacionalismo despertado por la victoria contra los franceses y a pesar del surgimiento de Juárez como encarnación del genuino líder popular y nacional, el país estaba aún más lejos que antes de poder conseguir la integración. Durante los años de la guerra, varias provincias habían llegado a lograr una existencia casi autónoma, realmente aislada social, económica y políticamente del resto de México. La parcelación de las tierras comunales había contribuido sólo ligeramente a aumentar las filas de la clase media puesto que algunas de las mejores tierras habían ido a parar a manos de los ricos hacendados. Los pocos campesinos que llegaron a adquirir una parcela de tierra propia fueron calificados como «los riquitos» por los menos afortunados; éstos estaban creando grupos muy similares a los *kulaks* rusos o a los *coqs du village* franceses.

Estos problemas estructurales derivaban de los surgidos a raíz de la guerra civil y la guerra contra los franceses. Los diez años de lucha habían sumergido a la economía mexicana en el caos, puesto que la riqueza de la Iglesia con la que contaban los liberales para pagar algunos de sus proyectos más ambiciosos se había gastado en costear la guerra. Muchas minas y parte del campo estaban abandonados. La base del impuesto federal había descendido hasta el punto de desaparecer. Durante la mayor parte de la presidencia de Juárez, su último ministro de Hacienda, Francisco Mejía, anotó en sus memorias que prácticamente no había un peso en el Tesoro. No contribuyeron a mejorar la situación las frías relaciones que mantenía México con Europa desde la ejecución de Maximiliano y la negativa de Juárez a pagar las deudas de Maximiliano. Los Estados Unidos, con los que México estaba contrayendo cada vez más relaciones de dependencia como consecuencia, no podían resarcir al país de la pérdida de los mercados europeos y las inversiones de capital.

La nación mexicana estaba compuesta, por una parte, por un ejército enorme controlado sólo vagamente por la administración central, y, por otra parte, por los aparatos del gobierno, que estaban tremendamente debilitados. Después de la derrota inicial de los liberales en 1863, la mayor parte del aparato burocrático había abandonado al gobierno de Juárez y se había unido a la administración de Maximiliano. Aun en el caso de que los burócratas hubieran permanecido leales a Juárez, habrían podido hacer muy poco durante muchos años, ya que la administración liberal controlaba sólo una pequeña parte del país. La debilidad del Estado y la falta de control gubernamental sobre el ejército podrían haberse enmendado con una base social y política unida y coherente. Ésta la constituía el movimiento liberal, que estaba resquebrajado. El partido liberal mexicano se parecía a los partidos liberales europeos en el nombre, en el programa y en la terminología que empleaba, pero no en su composición social, ya que sólo en menor medida recibía apoyo de la burguesía, que para empezar era poco nume-

rosa y estaba compuesta principalmente de fabricantes textiles y de los llamados «agiotistas»: comerciantes que especulaban con préstamos al gobierno. El resto de la burguesía era, en general, extranjera, no nativa. Después de la independencia mexicana, los comerciantes británicos reemplazaron a los españoles que antes dominaban el sector. Entre los años 1840 y 1850, los alemanes habían empezado a ocupar su puesto, y ellos, a su vez, fueron relegados de las empresas comerciales por comerciantes franceses, conocidos como «Barcelonnettes» por la ciudad del sur de Francia de la que la mayoría procedía.

El movimiento liberal recibía su fuerza sustancial de los grandes terratenientes; algunos de ellos se asociaron a los liberales porque, al igual que los barones alemanes de los siglos xv y xvi, esperaban obtener acceso a las extensas propiedades de la Iglesia. Para otros, la motivación era oponerse al intento de los conservadores de imponerles un control centralizado. Luis Terrazas es un típico representante de este grupo, exceptuando el hecho de que él no era rico de nacimiento sino que desde sus orígenes como carnicero había llegado a su posición por el matrimonio. Las quejas de Terrazas en contra del régimen conservador eran muy variadas; por una parte, se mostraba despectivo ante la incapacidad de los conservadores para proteger al estado de Chihuahua, su estado natal, de los indios nómadas que lo acechaban y, además, estaba resentido por habersele negado la entrada en el selecto grupo de la oligarquía; y por otra parte, codiciaba las tierras públicas que el gobierno central controlaba. Una vez que se convirtió en gobernador liberal de su estado natal, utilizó su poder para lograr su enriquecimiento personal mediante la adquisición de enormes lotes de tierras públicas (y algunas propiedades de la Iglesia), así como para desarrollar, con mucha más energía que sus predecesores, una política popular de resistencia contra los cada vez más numerosos ataques feroces de los indios apaches sobre la población de Chihuahua.

Los propietarios, como Terrazas, miraban con mucha suspicacia a otro de los grupos que daba apoyo a los liberales, la clase media: comerciantes locales, pequeños empresarios, rancheros, pequeños funcionarios del gobierno y algunos intelectuales radicales. Esta clase media llegó a ver el poder de los terratenientes como el mayor obstáculo para su propio avance, y por tanto instigó al gobierno central a vigilar más estrictamente a los caciques regionales mediante, por ejemplo, la exigencia del pago de una parte más equitativa de sus rentas procedentes de las grandes haciendas.

Las dos alas del partido liberal se las arreglaron para mantener un difícil equilibrio y cooperar en los períodos de guerra, pero en cuanto ésta terminó, surgieron las disputas y conflictos entre ambas. De cualquier manera, los grandes propietarios y la clase media estaban unidos para oponerse a las demandas de un tercer grupo, el «sector popular». Todavía hoy no se sabe con exactitud quiénes constituían este «sector popular», pero era un grupo heterogéneo que reunía a algunos campesinos, a un proletariado textil incipiente y a herreros, dependientes y similares. Su meta era la redistribución de la tierra a gran escala y sin restricciones. Los liberales no habían sido partidarios de la movilización de este sector durante la guerra civil, pues recordaban que los campesinos se convirtieron en una fuerza difícil de controlar en 1810 cuando el cura Hidalgo los llamó a sus filas, y más tarde durante la guerra de castas en Yucatán a finales de los años cuarenta una de las facciones de la oligarquía en pugna los movilizó. Du-

rante la guerra contra los franceses, Juárez había dejado a un lado esa preocupación y había hecho una llamada general para luchar contra las fuerzas extranjeras invasoras. De nuevo, una vez organizadas, las fuerzas populares no dieron señales de querer disolverse rápidamente.

Estrategia política de Juárez

Parece sorprendente en un principio que Juárez, enfrentado a estos graves obstáculos, consiguiera conservar su liderazgo en el movimiento liberal mexicano por más de cinco años. Pero, de hecho, fue la propia escisión dentro del partido liberal lo que ayudó a Juárez a mantenerse en el poder. Las dos fuerzas principales del movimiento liberal, los hacendados y la clase media, lo atacaron alternativamente por no responder en el grado deseado a sus intereses, pero ninguno de los dos intentó derrocarlo porque sabía que mientras él estuviera en el poder la otra facción no adquiriría la supremacía. Tampoco el sector popular deseó su cese, puesto que, aunque estaba en absoluto desacuerdo con la Ley Lerdo que Juárez siguió aplicando, lo consideraba como uno de ellos, un indio pobre y que llegó a gobernar su país sin dejar nunca de mostrarse orgulloso de sus orígenes.

Poco después de haber logrado la victoria ante los franceses y los conservadores, Juárez se enfrentó al problema de las crecientes divisiones existentes dentro del partido liberal que impedían su funcionamiento, tratando de establecer un Estado fuertemente centralizado que pudiera aumentar de manera decisiva su independencia frente a la creciente división de su base política y social. Cuando su prestigio estaba en su punto más alto, convocó nuevas elecciones y, simultáneamente, un referéndum sobre una serie de enmiendas a la Constitución: la primera añadía un Senado a la Cámara de Diputados ya existente, con el fin de dividir y contrarrestar el poder del Congreso. La segunda daba al presidente el derecho a vetar cualquier proyecto de ley sujeto a la posibilidad de rechazarlo el Congreso con una mayoría de dos tercios. La tercera permitía a los ministros contestar las preguntas parlamentarias por escrito en lugar de hacerlo en persona. La cuarta privaba a la comisión permanente del Parlamento, que era la comisión que continuaba en sesión mientras el Congreso estaba en receso, de su derecho a convocar sesión plenaria de éste en cualquier momento. El referéndum no era exactamente para aprobar o no estas proposiciones, sino para decidir sobre el derecho del Congreso a adoptarlas por mayoría simple de votos en vez de tener que someterlas a la aprobación por separado de cada uno de los cuerpos legislativos del Estado. Durante un breve período, las dos fuerzas antagónicas del partido liberal se unieron en oposición a las medidas de Juárez y el presidente mexicano se vio obligado a retirar las enmiendas propuestas ante la creciente oposición que se desarrolló frente a ellas.

Para lograr conservar el poder, Juárez tuvo que hacer mayores concesiones a los dos grupos sociales que se habían opuesto a sus proyectos. A los hacendados les concedió autoridad prácticamente ilimitada sobre sus dominios, y para asegurarse el apoyo de la clase media, Juárez hizo crecer el aparato burocrático estatal —una de las fuentes preferidas de empleo de esta clase— e invirtió presupuesto federal en áreas de particular interés para este grupo, como era el mejora-

miento de la educación pública, especialmente en las ciudades. Consiguientemente, según mostraba el censo del gobierno, el número de escuelas públicas de primera y segunda enseñanza en México pasó de 2.424 en 1857 a 8.103 en 1874, dos años después de la muerte de Juárez. Quizá aún más importante para la clase media fue el hecho de que Juárez mantuviera, posiblemente porque no le quedaba más remedio, algunas instituciones democráticas. Mientras el gobierno medió en las elecciones, éstas fueron más honestas de lo que lo habían sido anteriormente; el Parlamento ya no era un cuerpo legislativo sin posibilidad de acción, sino que tenía voz para oponerse, la libertad de prensa casi era absoluta, y algunos de los más conocidos intelectuales —Manuel de Zamacona, Ignacio Altamirano, Francisco Zarco— fueron cada vez más directos en sus ataques contra los errores cometidos por el gobierno de Juárez.

Una parte de la clase media liberal, cuya influencia contribuyó a mantener a Juárez en la presidencia en los últimos años, estaba compuesta por aquellos oficiales del ejército que continuaban en el servicio activo, lo cual no deja de parecer una contradicción, ya que Juárez y los principales ideólogos del partido liberal consideraban que el estamento militar era una de las principales causas del atraso de México. En la Constitución de 1857 se habían suprimido los privilegios judiciales de los militares, y después de la derrota de Maximiliano se había desmovilizado a un gran número de soldados. Sin embargo, al incrementarse las contradicciones en la sociedad mexicana y aumentar las revueltas, la relación de dependencia del gobierno con respecto al ejército crecía cada vez más, y los oficiales pudieron ejercer su influencia política, social y económica en el campo mexicano.

Juárez trató de llegar a un acuerdo con sus antiguos enemigos con el fin de conseguir mayor apoyo para su causa. Los evidentes perdedores de los diez años de guerra que atormentaron a México entre 1857 y 1867 acabaron por salir mejor parados de lo que ellos o muchos de sus contemporáneos esperaban. Esto fue especialmente evidente en el caso de los políticos conservadores, los terratenientes y los funcionarios. En 1870, tres años después de su victoria, Juárez concedió una amplia amnistía dirigida a aquellos que colaboraron con Maximiliano. Como resultado, los terratenientes recuperaron sus posesiones y los funcionarios conservadores pudieron solicitar otra vez puestos en el gobierno. La Iglesia tuvo menos suerte que sus aliados, ya que nunca recuperó las tierras y propiedades que había perdido ni la supremacía económica que había hecho de ella la más importante fuente de créditos. Tampoco le fue posible, para la Iglesia, legalmente, solicitar impuestos de la población. Los privilegios legales del clero, la supremacía del catolicismo como religión oficial y la influencia de la Iglesia en materia educativa nunca recobraron el nivel que tenían antes de 1857. Las leyes de reforma se continuaron aplicando, pero de todas maneras, en la práctica, la Iglesia empezó a recuperarse rápidamente de sus pérdidas. Las contribuciones de sus ricos miembros enriquecieron sus arcas y se invirtieron de manera subrepticia en propiedades urbanas una vez más. Juárez no hizo ningún esfuerzo por detener esta acumulación de riqueza del clero, y, como contrapartida, la Iglesia dulcificó más adelante su intransigencia hacia los liberales. Esta actitud pudo deberse a la abrumadora victoria de los liberales después de muchos años de guerra civil, pero también a que algunos líderes eclesiásticos comprendieron que la pérdida de las

tierras en realidad había fortalecido su posición en el campo, al reducirse los motivos de conflicto entre la Iglesia y las grandes masas de la población rural. Muchos campesinos vieron en aquellos momentos como sus enemigos a los liberales, más que a la Iglesia. Esta actitud se reforzó cuando el clero se hizo más receptivo que en años anteriores a las quejas y demandas de los campesinos.

Juárez esperaba que estas medidas conciliadoras hacia la clase media y media alta mexicana, y hacia el estamento militar, pudieran evitar que un golpe de Estado lo derrocaria y le permitieran pacificar el país. Las expectativas del presidente mexicano demostraron ser ciertas en cuanto a su permanencia en el poder; Juárez permaneció en su despacho hasta su muerte por causas naturales en 1872. Pero, en cuanto a la pacificación de México, sus esperanzas fueron falsas, porque para complacer a la elite del país había sacrificado los intereses del campesinado. El resultado fue que el descontento en el campo durante la restauración de la República alcanzó proporciones anteriormente desconocidas. El gobierno era demasiado débil para reprimir el descontento, lo que debilitó aún más la administración juarista. Esto estimuló a otras fuerzas, desde tribus nómadas hasta las clases media y alta opuestas al régimen, a tomar las armas y desafiar al gobierno. De esta manera, el gobierno era aún más incapaz de controlar el desorden en el campo. Era un círculo vicioso.

El descontento de los campesinos provenía tanto de la frustración de sus expectativas como del deterioro real de sus condiciones de vida. El gobierno liberal no hizo nada para satisfacer las esperanzas del campesinado, ni siquiera para protegerlo del paulatino empeoramiento de sus condiciones políticas y económicas. El final de la guerra supuso la vuelta al campo de un gran contingente de veteranos de guerra que no poseían tierras ni empleo y que aumentaron el ya abundante número de desposeídos y desempleados. La Ley Lerdo había expulsado a muchos campesinos de las tierras comunales que antes cultivaban, y había distribuido las propiedades, generalmente de manera poco equitativa, entre ellos, si no se las habían apropiado ya hacendados o especuladores.

La administración liberal, aunque hubiera querido, no habría podido evitar que las tierras de la Iglesia pasaran del clero a manos de los terratenientes, en lugar de pasar a manos de los campesinos. Hay que tener en cuenta que durante los años de la guerra contra los conservadores y contra los franceses, los liberales sólo controlaban ciertas zonas de México y que además sus ejércitos necesitaban el dinero procedente de la venta de las tierras de la Iglesia para financiar la guerra. Pero una vez conseguida la victoria, los liberales podrían haber utilizado las haciendas de los conservadores derrotados y las vastas tierras públicas, frecuentemente vacías, para poner en funcionamiento un programa de distribución de la tierra y crear en México una clase de campesinos. Sin embargo, la administración de Juárez, a pesar de conceder algunas tierras públicas a un cierto número de veteranos de guerra, no se planteó nunca seriamente esta posibilidad. Las tierras de los hacendados conservadores, o bien fueron devueltas a sus anteriores propietarios, o bien vendidas al mejor postor o a los terratenientes liberales. El gobierno mexicano nunca se planteó hacer algo similar a lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos después de su guerra civil: reducir las tensiones sociales provocadas por la guerra con la *Homestead Act*, que cedía tierras gratuitamente a nuevos pobladores. Se empezaron a ceder o vender algunas tierras del gobierno

a hacendados mexicanos, mientras otras se reservaron para la gran ola de campesinos inmigrantes extranjeros que nunca llegó.

Tampoco supo Juárez enfrentarse a otra de las principales fuentes de inquietud para el campesinado: la desigual carga impositiva. La alcabala —aduana interna— y la contribución personal —el equivalente al salario diario de seis a doce días de un peón medio de hacienda— supusieron un impuesto altamente desproporcionado en perjuicio del pobre: un hacendado que poseía una tierra valorada en 20.000 pesos pagaba al gobierno el mismo impuesto que su empleado que no tenía posesiones. Los liberales originariamente habían abogado por la eliminación de la alcabala, no tanto debido al desigual efecto que suponía para el pobre, sino porque representaba una interferencia para el libre comercio, pero las arcas vacías del Tesoro fueron suficientes para hacerlos desistir en sus intentos. Los hacendados, por supuesto, no querían ni oír hablar de un reajuste de la carga fiscal. Finalmente, la única medida que se adoptó para aliviar a los contribuyentes más castigados fue la exención del impuesto personal a los que ganan menos de 26 centavos al día.

Juárez no hizo más que un débil esfuerzo por aliviar los terribles excesos cometidos en nombre de las deudas de peonaje y, estrechamente ligado a ellos, el poder arbitrario del hacendado sobre el peón. En 1868 un diputado liberal, Julio Zárate, pidió que se prohibiera a los terratenientes la creación de cárceles propias, el empleo de castigos corporales o hacer hereditarias las deudas de padres a hijos. El Congreso rechazó su proposición aduciendo que no tenían jurisdicción sobre la materia y que este era un asunto de exclusiva competencia de los jueces locales. Juárez apoyó la proposición de Zárate e intentó intervenir, pero las limitadas medidas que decretó para restringir las deudas del peonaje nunca se pusieron en práctica.

Levantamientos campesinos en la época de Juárez

Durante la etapa colonial, los conflictos armados en las zonas rurales habían sido de tres tipos, cada uno de ellos específico de una determinada región. En primer lugar, hubo rebeliones locales, generalmente restringidas a un único pueblo, y que pretendían, principalmente, resolver injusticias concretas provenientes de la administración colonial más que derrocar todo el sistema colonial. Este tipo de revueltas se dio fundamentalmente en las regiones centrales del país. En segundo lugar, hubo levantamientos a mayor escala contra el sistema colonial como totalidad por parte de grupos que habían asimilado sólo superficialmente la civilización española y la religión cristiana, y que pretendían restaurar lo que consideraban el orden social, económico y religioso prehispánico. Esto ocurrió fundamentalmente en el sur de México. Finalmente, hubo movimientos de resistencia por parte de grupos que todavía no se habían dejado conquistar por la civilización española. Este fenómeno se dio casi exclusivamente en la frontera norte.

Durante el período de restauración de la República se produjeron revueltas en las tres zonas, pero tendieron a ser de carácter más radical, de más largo alcance, de mayor duración y más violentas que durante el período colonial. Una de las revueltas más radicales de México central estalló en 1868, muy cerca de

la capital. La prensa de Ciudad de México calificó a sus protagonistas de «socialistas rabiosos», y así parecían considerarse ellos. Estaban fuertemente influidos por el socialista Plotino Rhodakanati que vio en Jesucristo al «divino socialista de la humanidad» y al «salvador de la libertad del mundo», y en Chalco abrió una escuela donde dos de sus discípulos propagaron sus teorías. A su vez, sus enseñanzas estimularon a un discípulo, un campesino llamado Julio López, a hacer un llamamiento a los campesinos de Chalco, Texcoco y otras poblaciones vecinas para levantarse contra los terratenientes locales. «Queremos socialismo —escribió—, queremos destruir el presente y vicioso estado de explotación ... queremos nuestra propia tierra para cultivarla en paz.»² Los hombres de López, de hecho, llegaron a apoderarse de algunas tierras alrededor de las ciudades de Chalco y Texcoco e inmediatamente se las dividieron entre ellos. Cinco meses después, las tropas federales derrotaron a los rebeldes; y López fue arrestado y fusilado.

La influencia socialista también se dejó sentir en estados más alejados de la capital, como Hidalgo. Dos campesinos, Francisco Islas y Manuel Domínguez, al frente de varios miles de hombres, lograron ocupar la ciudad de Tezontepec y el centro minero de Mineral del Monte. Su principal objetivo era recuperar las tierras que, según ellos, los hacendados locales se habían apropiado indebidamente. «La violencia es nuestra manera de remediar los males cometidos contra nosotros», escribió Francisco Islas en una carta al periódico *La Libertad*. «El gobierno respalda a los hacendados, la "sociedad" también, y lo mismo los periodistas que no se avergüenzan de venderse al mejor postor. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino luchar?» Los rebeldes resistieron dos meses, diciembre de 1869 y enero de 1870, y cuando las tropas federales reconquistaron finalmente las ciudades, muchos de ellos, incluidos Islas y Domínguez, se retiraron a las montañas de Hidalgo desde donde encabezaron otra rebelión contra el gobierno varios años después.

Los movimientos campesinos en el sur de México conservaron las características del período colonial; es decir, fueron profundamente mesiánicos, mezclando ideas sociales y religiosas en una única visión de origen milenarista. El ejemplo más notable es la historia de una campesina, Augustina Gómez Chechep, que vivía en el pueblo de Tzarjalhemel entre los indios chamulas, y se convirtió en la cabecilla de un nuevo culto religioso, que se transformó pronto en vehículo de protesta social contra la dominación blanca. El levantamiento chamula (12 de junio de 1869 a 20 de octubre de 1870) fue sofocado finalmente por las tropas federales con el menor derramamiento de sangre posible.

Los mayas tuvieron más éxito en su oposición al gobierno. Después de la guerra de castas, que se extendió de 1847 a 1855, consiguieron establecer un estado independiente en el sur de Yucatán y hasta 1901 resistieron los numerosos ataques emprendidos por las tropas federales para restablecer la soberanía de México. Es más, provistos de armas que compraban a la vecina Honduras británica, a menudo llevaban a cabo con relativa impunidad incursiones en los territorios mexicanos limítrofes.

La frontera norte de México continuó eludiendo el control federal, al igual

2. Citado por Gastón García Cantú, *El socialismo en México*, México, 1969, p. 173.

3. *Ibid.*, pp. 60, 76.

que durante la época colonial. Las guerras apaches, que se habían desarrollado sin cesar desde 1831, alcanzaron un nuevo clímax, pues al verse desplazados cada vez más hacia el oeste por el violento empuje de los pobladores norteamericanos, los indios hacían incursiones cada vez más frecuentes a través de la frontera mexicana que era más vulnerable. Bajo el liderazgo de su legendario jefe Cochise y de sus sucesores Victorio y Ju, la vida fronteriza quedó casi paralizada durante algún tiempo. «No hay trabajo en los campos porque sería asesinado el trabajador miserablemente por el apache; no hay qué hacer en las poblaciones, porque habiendo escasez y yendo todo en creciente decadencia, nadie emprende ... La gente del pueblo no dice otra cosa sino que espera los carros de don Fulano o de don Zutano para irse a Arizona», afirmaba en 1879 el editorial de un periódico en Sonora.⁴ En poco tiempo, las bandas de Cochise causaron la muerte de 15.000 personas, ya que los soldados que se enviaban a la frontera norte, débiles y mal pagados, no podían competir con los apaches.

Sólo de manera gradual, hacia el final de la presidencia de Juárez, reunió México la fuerza suficiente para controlar las incursiones. Los hacendados comenzaron a armar y organizar a sus peones en milicias privadas; el gobierno empezó a ofrecer generosas concesiones sobre las tierras para cualquiera que estuviera dispuesto a defenderlas con su vida. Como resultado, se reforzaron las colonias militares existentes y se crearon otras nuevas. De esta forma, el campesinado independiente, que estaba siendo eliminado en el centro y en el sur del país, se fortalecía en el norte. Al mismo tiempo, se estaba desarrollando una nueva alianza entre los hacendados norteros y los campesinos para luchar contra los apaches, lo que hizo que los hacendados cobraran legitimidad a los ojos de los campesinos debido a su capacidad de organizar la guerra contra los invasores. En Chihuahua, el jefe militar que luchó contra los apaches fue Joaquín Terrazas, primo del gobernador Luis Terrazas, quien ayudó a organizar y financiar las luchas contra los indios. A pesar de la existencia de estas milicias campesinas, los gobiernos de la República restaurada se mostraron tan incapaces de controlar la situación en la frontera norte como lo fueron para frenar otro tipo de rebeliones.

La protesta social organizada fue sólo una faceta del descontento que caracterizó los años finales del mandato de Juárez, pues también el bandolerismo estaba muy extendido. Peones fugitivos, campesinos descontentos y soldados desmovilizados recorrían los campos asaltando diligencias y haciendas, y atacando los cargamentos de las minas de oro y plata. A finales del año 1868 se pensaba que el número de bandidos que actuaba en los alrededores de una sola ciudad, Guadalajara, en el estado de Jalisco, era de cerca de un millar. Los progresos logrados por la nueva policía organizada por Juárez, los Rurales, en la lucha contra el banditismo fueron mínimos frente a lo que era la plaga más extendida en los campos mexicanos.

4. Citado por Luis González y González en «Los campesinos», en Daniel Cosío Villegas, ed., *Historia moderna de México: la república restaurada. Vida social*, México, 1956, p. 186.

La primera rebelión de Díaz

La disminución del apoyo popular a Juárez era un constante acicate para los rivales que intentaban desbancarlo. Entre estos rivales había algunos que eran antiguos caudillos conservadores a quienes Juárez había destituido del gobierno estatal para reemplazarlos por sus propios hombres; otros eran antiguos generales liberales que creían que Juárez no les había dado el cargo que merecían. Estos hombres lanzaban proclamas en el diario local que ellos controlaban prometiendo «salarios más elevados», «leyes más justas», y un «gobierno más democrático»; reunían un ejército improvisado de peones de sus haciendas y descontentos de diferentes procedencias, y controlaban alguna pequeña ciudad o población de las proximidades. Rara vez llegaban a lograr algo más antes de ser dispersados por las tropas federales.

Sin embargo, hubo una excepción. Quizás el personaje más popular que surgió de la guerra contra los franceses fue un antiguo subordinado de Juárez, el general Porfirio Díaz, que nació en 1830 en el estado de Oaxaca, estado natal también de Juárez, y estudió en el mismo seminario católico que éste. A los 17 años se alistó en el ejército para combatir a las fuerzas norteamericanas invasoras. Llegó demasiado tarde para presenciar muchas batallas, pero recuperó el tiempo en la lucha contra los franceses. Ascendió rápidamente al puesto de brigadier general, y en 1862 por primera vez se oyó hablar de él por ser uno de los comandantes mexicanos al mando de las tropas que infligieron a los franceses su más humillante derrota en la primera batalla de Puebla. Poco tiempo después fue capturado por los franceses, pero consiguió escapar, y estuvo posteriormente al frente de otra gran victoria militar en la batalla de La Carbonera. Tenía 37 años al terminar la guerra y se consideraba con iguales derechos que Juárez; en 1867 fue candidato para la presidencia en oposición a éste. Se presentó nuevamente en 1871 y perdió otra vez. En 1871, en el plan de La Noria, que recibió el nombre de la hacienda de Díaz, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas e hizo un llamamiento a la rebelión. Aunque el plan contenía alguna vaga referencia a la necesidad de una reforma social, en realidad tenía un único y específico punto político: que se limitara la presidencia a un solo mandato. Para que el programa pareciera menos personalista de lo que era, Díaz prometió que no se presentaría a las siguientes elecciones.

El llamamiento de Díaz a las armas tuvo cierto eco, provocando una rebelión que tuvo algo más que carácter local. El hermano de Díaz, Félix, movilizó gran número de fuerzas en su estado natal de Oaxaca, compuestas por milicias del estado e incluso algunas tropas federales que estaban estacionadas en la vecindad, y se apoderó de la capital del estado. Algunos generales nortños, al frente de los cuales estaba el gobernador de Nuevo León, Gerónimo Treviño, reunieron un ejército de varios miles de hombres y se apoderaron de grandes zonas de Nuevo León, Durango, Sinaloa y Zacatecas. El propio Porfirio Díaz encabezó un contingente de mil soldados con el cual pretendía apoderarse de Ciudad de México. Una vez llegado a Chalco y Texcoco, en las afueras de la capital, Díaz reiteró su llamada a la revuelta general, pero no obtuvo respuesta. Entonces Juárez envió sus propias tropas a luchar contra los rebeldes y Díaz tuvo que retirarse preci-

pitadamente. Mientras tanto, entre las tropas de Félix Díaz en Oaxaca reinaba el desconcierto tras la muerte de su jefe a manos de un asesino desconocido, y poco después fueron derrotadas por las tropas federales. Las fuerzas de Treviño no aguantaron mucho más. Juárez había sorteado la revuelta más grave a que había hecho frente desde la derrota de Maximiliano, pero no vivió lo suficiente para saborearla.

La sucesión de Juárez

El 17 de julio de 1872, Juárez sufrió un ataque al corazón, muriendo al día siguiente. Según la Constitución, su sucesor debía ser el presidente del Tribunal Supremo, que era en aquel momento Sebastián Lerdo de Tejada. A diferencia de Juárez, Lerdo no era de ascendencia india sino criolla, ya que su padre era un comerciante español; sin embargo, al igual que Juárez, Lerdo estudió en un seminario y llegó hasta el punto de tomar votos menores en su formación hacia el sacerdocio. Llegado a ese punto abandonó sus estudios eclesiásticos y se dedicó a estudiar leyes. Mientras era todavía estudiante de derecho, se interesó en la política liberal y llamó la atención de uno de los líderes del movimiento liberal, Ignacio Comonfort. Bajo la tutela de éste fue designado para el Tribunal Supremo, cuando contaba sólo 27 años. Cuando Comonfort fue destituido, Lerdo renunció a su puesto en el tribunal y se convirtió en rector de su *alma mater*, el colegio de San Ildefonso en la capital de México. El sucesor de Comonfort, Juárez, llamó a Lerdo para formar parte de su gabinete ministerial, primero como ministro de Justicia y después como secretario de Estado. Lerdo fue una de las voces más poderosas en favor de la independencia de México durante la invasión francesa, y después de la guerra volvió al Tribunal Supremo como presidente. En 1871 compitió con Juárez por la presidencia, pero perdió. A diferencia de Díaz, él no se rebeló sino que volvió a ocupar su cargo en el Tribunal Supremo. Tras la muerte de Juárez, y a pesar de que su cargo le garantizaba el derecho a asumir la presidencia, decidió convocar elecciones inmediatamente. Éstas se celebraron en octubre de 1872, y esta vez ganó Lerdo.

El punto de apoyo del gobierno de Juárez durante sus años de declive fue la coalición entre los intelectuales liberales, cuyo liberalismo social iba siendo reemplazado cada vez más por un liberalismo económico, y los propietarios liberales, cuya única razón para apoyar al liberalismo político o social era la oposición al poder económico y político de la Iglesia, que había desaparecido una vez ésta perdió su supremacía; y a ambos, intelectuales y propietarios, se unió el ejército, cuya influencia crecía de manera sostenida. Cuando llegó el momento, todos ellos dieron su apoyo a Lerdo, pues a sus ojos tenía las virtudes de Juárez pero no sus defectos. Como Juárez en su última época, Lerdo era conservador en materia social; a diferencia de Juárez provenía, en cambio, de la clase alta criolla y carecía de los ocasionales brotes de simpatía que su predecesor había mostrado hacia los sufrimientos de los estamentos más pobres de la sociedad.

En muchos aspectos, a pesar de seguir una política similar a la llevada a cabo por Juárez durante sus últimos años de mandato, Lerdo obtuvo más éxito que él. Pudo fortalecer considerablemente el papel del Estado y, ya en los primeros

días de su mandato, la Cámara de Diputados se mostró más receptiva a sus deseos de lo que nunca lo fuera con Juárez. Además, se le permitió crear el Senado, lo cual diluía considerablemente el poder de la Cámara y a la vez aumentaba el papel bipolar del Ejecutivo.

También tuvo Lerdo, en un principio, más éxito que su predecesor en cuanto a la pacificación del país. Las bases para ésta se habían establecido con Juárez, y Lerdo cosechó los beneficios de la reciente victoria militar de su predecesor sobre Porfirio Díaz. Una vez derrotado éste, Lerdo pudo mostrarse magnánimo y ofrecerle una amnistía tanto a él como a sus hombres, amnistía que no estaba en condiciones de rechazar y, aunque humillándose, aceptó. Se le destituyó de su cargo militar y permaneció exiliado en su hacienda de La Noria. La derrota de Díaz sirvió para desalentar por un tiempo a otros posibles rebeldes y los primeros tres años y medio de gobierno de Lerdo fueron considerablemente más tranquilos que los años de la presidencia de Juárez.

Lerdo consiguió extender el poder del gobierno federal hasta regiones que se habían resistido al control de Juárez. Fue capaz de acabar con un caudillo regional que había establecido una especie de república campesina en México: Manuel Lozada en el territorio de Tepic. Lozada, a quien la prensa mexicana se refería como «el Tigre de Arica» (Arica es la cordillera donde normalmente tenía su cuartel general), era, en algunos sentidos, ejemplo característico de muchos caudillos que implantaron su dominio de hierro en el siglo XIX mexicano. El término tigre hacía referencia a su ferocidad al aplastar a sus enemigos. Estaba deseoso de establecer alianzas con cualquiera que reconociera su poder y había ofrecido su apoyo tanto a Maximiliano como a Juárez, y durante un tiempo había mantenido estrechas relaciones con la casa comercial Barron and Forbes, que a cambio del apoyo quería obtener concesiones a gran escala en Tepic. En otros aspectos, en cambio, Lozada era un modelo atípico en comparación con la mayoría de los caudillos, ya que en la base de su poder estaban las comunidades indígenas a las que había devuelto las tierras que los hacendados les habían quitado. Los representantes de las tribus consiguieron de esta manera cada vez más poder dentro de su movimiento, lo cual aumentaba el temor de los hacendados de Tepic y de los estados limítrofes. A cambio de la subordinación nominal a su gobierno, Juárez había permitido a Lozada extender el dominio sobre la región. Lerdo, en cambio, envió a las tropas federales para acabar con él. En 1873, capturaron a Lozada y lo fusilaron, derrotaron a las comunidades indígenas y cedieron muchas de sus tierras a los hacendados.

La economía de México se desarrolló mucho más rápidamente que en años precedentes, aumentando el prestigio de Lerdo. El desarrollo de la economía respondía en parte a la mayor pacificación del país y en parte al hecho de que Lerdo estaba recogiendo los frutos de las distintas iniciativas económicas emprendidas por su predecesor. Concretamente, en 1873 se pudo inaugurar la primera línea importante de ferrocarril que unía Ciudad de México y el puerto de Veracruz, lo cual estimuló el desarrollo económico.

A la vista de estos logros, parece en un principio sorprendente que Lerdo no pudiera mantenerse en su cargo más de una legislatura como había hecho su predecesor. En 1876 el intento de Díaz de derrocar a Lerdo tuvo más éxito que cuando lo intentó con Juárez. En parte fue debido a que Lerdo carecía del prestigio

que había gozado Juárez como líder durante la guerra contra los franceses y, además, no tuvo éxito su intento de mantener el consenso con la clase alta que disfrutó cuando llegó a la presidencia. El apoyo a Lerdo de estas fuerzas se había interrumpido por la política que llevó a cabo contra la Iglesia, mucho más enérgica que la de Juárez en los años de la República restaurada. Juárez, después de su victoria sobre las fuerzas encabezadas por la Iglesia, de la expropiación de sus propiedades y después de haber llevado a cabo las leyes de reforma, intentó evitar cualquier tipo de confrontación con la Iglesia y pasó por alto que el clero violara algunas de las leyes de reforma, como, por ejemplo, la nueva acumulación de riqueza. En cambio, Lerdo expropió las propiedades de la Iglesia, expulsó del país a los jesuitas no nacidos en México, y, como gesto simbólico, incorporó nuevamente a la Constitución las leyes de reforma.

El apoyo que la clase alta mexicana podía haber dado a Lerdo estuvo también sujeto a su política contradictoria con respecto a la construcción de los ferrocarriles. Aunque el presidente había apoyado con entusiasmo la construcción de la línea Ciudad de México-Veracruz, y era igualmente partidario de la construcción de una línea de este a oeste que uniera ambas costas de México, era mucho más reticente a la idea de construir una línea de ferrocarril que uniera México con los Estados Unidos. «Entre la debilidad y la fuerza, el desierto», se comentaba que dijo. Cuando hubo de ceder a la presión que se ejercía sobre él en cuanto a la construcción de la línea ferroviaria norte-sur, trató de que fuera una compañía mexicana la encargada de llevar a cabo la construcción, pero dado que esta compañía no pudo obtener el capital necesario, Lerdo dio finalmente la concesión para tender la mayor parte de la línea a un promotor norteamericano, Edward Lee Plumb. El resultado de este acuerdo dejó descontentos tanto a los que apoyaban como a los que se oponían a la construcción de la línea de ferrocarril entre México y Estados Unidos. Los que la apoyaban sentían que habían esperado demasiado para que les otorgaran una concesión provechosa en la construcción de esta línea, mientras que los que se oponían temían que la comunicación con Estados Unidos, que acercaba sus economías, permitiría luego el control y absorción de México por el país vecino. Estos oponentes se unieron a los tradicionales «cesantes» que creían que la caída de la administración Lerdo les daría acceso al poder y a las posiciones gubernativas, y en 1876 se unieron al más poderoso oponente de Lerdo, Porfirio Díaz.

LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE DÍAZ, 1876-1880

El alzamiento de Tuxtepec

Después de su retiro forzoso en La Noria, Díaz era aparentemente un hombre acabado, sus actividades diarias estaban reducidas a las labores agrícolas y a manufacturar sillas. Pero, en realidad, se mantenía activo, buscando apoyo en viejas glorias militares para emprender otro ataque contra la presidencia. En enero de 1876, cuando la suerte política de Lerdo estaba deteriorada, Díaz dio el golpe. A petición suya, el comandante militar de Oaxaca lanzó una proclama, el plan de Tuxtepec, llamando a la revuelta armada contra Lerdo y a favor de la elección

de Díaz como presidente; igual que el plan de La Noria, el nuevo contemplaba el principio de la no reelección. Pero a diferencia del de La Noria, extendía este principio al nivel municipal. La insistencia en la democracia municipal era una causa muy popular entre las clases media y baja de la sociedad mexicana, y también entre algunos hacendados cuyo poder iba disminuyendo debido a la autoridad creciente de los gobernadores, que eran usualmente además los más importantes terratenientes del estado. Era una propuesta, pues, especialmente atractiva para la clase media, que había ejercido medidas de control no sólo en las ciudades donde su representación era muy fuerte, sino incluso en muchos pueblos que elegían con frecuencia como alcaldes y administradores a personas que pudieran leer y escribir y disfrutaran de mejor situación económica que la mayoría de los campesinos. La propuesta de autonomía municipal pareció otorgar a Díaz el apoyo de muchos miembros del campesinado, aunque no hay evidencia de que él mostrara especial interés en ganárselos para su causa.

En un principio, el segundo alzamiento de Díaz pareció ser aún más infructuoso que el primero; las tropas de Lerdo derrotaron hábilmente a las milicias improvisadas de Oaxaca. Y en Icamole, el ejército de Lerdo venció a las tropas que encabezaba el propio Díaz. Lerdo entonces se creyó en una situación suficientemente fuerte como para convocar nuevas elecciones y obtener la reelección, pero la rebelión de Díaz se siguió propagando. El nuevo presidente del Tribunal Supremo, José María Iglesias, que era legalmente el sucesor a la presidencia, acusó a Lerdo de haber cometido fraude en las elecciones y se negó a aceptar los resultados de las mismas. Intentó apoderarse de la presidencia con el apoyo de varios gobernadores, senadores y diputados que habían quedado fuera de la administración de Lerdo. Esta división interna en el seno del gobierno infundió nueva vitalidad a la rebelión de Díaz, cuyas tropas se enfrentaron con las de Lerdo en Tecoaac, infligiéndoles una dolorosa derrota. Incapaz de enfrentarse a la presión conjunta de Iglesias y Díaz, Lerdo renunció a la presidencia y huyó de México. Díaz propuso reconocer a Iglesias como presidente provisional, si él, a su vez, le reconocía como jefe del nuevo ejército revolucionario y prometía convocar pronto nuevas elecciones. Iglesias, sobreestimando su fuerza, se negó. Cuando las fuerzas de Díaz marcharon contra él, sus tropas fueron completamente aniquiladas. En la primavera de 1877, tuvieron lugar las elecciones, y Díaz se convirtió en el nuevo presidente.

El régimen de Porfirio Díaz, en un principio, supuso mucha menos discontinuidad con respecto al de sus predecesores de lo que se ha creído habitualmente. Tuvo un carácter militar más acentuado que los regímenes de Juárez o Lerdo, ya que dedicó un mayor porcentaje del presupuesto a gastos militares. Además, para asegurarse la lealtad del ejército, Díaz incluyó en la nómina a sus propios soldados y a los que habían luchado al lado de Lerdo e Iglesias. De todas formas, Díaz, obviamente, se dio cuenta de que el ejército era demasiado débil, estaba demasiado dividido y no era lo suficientemente fiable como para ser el único o el principal sostén del régimen. Por ello, intentó recuperar y reforzar la coalición existente entre las clases media y alta que había servido de base social y política al régimen de sus predecesores. Con respecto a las clases altas, su política fue «divide y vencerás». Consiguientemente, destituyó de sus cargos a caciques locales leales a sus predecesores, como el gobernador de Chihuahua, Luis Terra-

zas, y nombró en su lugar a oponentes de parecida extracción social. Aun así, permitió a los hombres destituidos conservar sus propiedades y extender su influencia económica, siempre que no se rebelaran contra él. Para muchos hacendados la pérdida de poder político quedó más que compensada por la estrategia del presidente de vender las tierras públicas, lo que les proporcionó estupendas oportunidades de enriquecimiento.

A primera vista, parecería que era más difícil para Díaz ganarse el apoyo de la clase media, ya que las fuentes económicas de que disponía se habían visto drásticamente recortadas por las inversiones realizadas para reorganizar el ejército, pero dado que la situación no le permitía ofrecer grandes compensaciones económicas a la clase media, optó acertadamente por hacerle concesiones políticas. Hizo que el Congreso recién elegido proclamara el principio de la no reelección no sólo aplicable al presidente sino también a los gobernadores. De esta forma muchos cesados de la clase media tendrían mayores oportunidades de acceder al poder una vez que el período legislativo terminara. Además, con el fortalecimiento de la autonomía municipal, logró obtener cierto apoyo de la clase media regional que había sido ignorada durante mucho tiempo tanto por Juárez como por Lerdo.

Díaz no llevó a cabo una represión masiva, ni decretó el encarcelamiento o la ejecución de sus enemigos. Tampoco acabó con los grupos políticos, que continuaron existiendo y participando en la vida política. Se siguieron celebrando elecciones nacionales, regionales y locales, ni más ni menos honestas que las que sus predecesores celebraban. La prensa continuó teniendo un amplio margen de libertad. El hecho de que la oposición no utilizara los cauces para combatir al régimen de Díaz, como lo habían hecho los oponentes de Juárez y Lerdo, se debe en gran medida a la emergencia surgida ante la primera amenaza externa que la soberanía de México conoció después de la derrota de Maximiliano.

Durante diez años, desde 1867 hasta 1877, México había conocido cierto respiro respecto a la intervención exterior, hecho que raramente experimentó antes y raramente iba a disfrutar otra vez. La fatal experiencia de Francia había quebrado cualquier esperanza colonial que Europa alimentara acerca de México. No se reestablecieron relaciones diplomáticas con los países una vez agresores, Francia, Gran Bretaña y España, pero ninguno de ellos se vio tentado a arriesgarse en una nueva intervención. Alemania estableció relaciones diplomáticas y los comerciantes alemanes ocuparon algunas posiciones estratégicas en el comercio exterior de México, pero, en ese momento, ese país no tenía ambiciones políticas respecto a México.

Las relaciones con Estados Unidos, que habían sido buenas durante la intervención francesa, empezaron a enfriarse considerablemente entre 1867 y 1877, preparándose las condiciones para las confrontaciones que habían de llegar. Las causas del conflicto eran diversas. Como los pobladores norteamericanos continuaban su avance hacia el oeste, las tribus indias y los ladrones de ganado utilizaban como refugio la frontera mexicana, menos poblada y menos defendida, para luego lanzar sus ataques sobre los Estados Unidos. El resultado era que las autoridades de ambos lados de la frontera constantemente se intercambiaban acusaciones por no proceder con la energía suficiente en contra de los asaltantes. Se añadía el hecho de que el gobierno mexicano, buscando atraer pobladores a esta

volucionaria. Éste, de hecho, entabló negociaciones con varios de estos grupos y prometió estudiar sus quejas si deponían las armas, pero una vez desarmados ordenó disparar contra ellos.

La política interna de Díaz, que prometía la estabilidad a la vez que generosas ayudas, estimuló a los empresarios norteamericanos a firmar el contrato para la construcción de dos líneas principales de ferrocarril que unieran Estados Unidos y México. La elite política mexicana vio la construcción del ferrocarril como la única medida posible para salvaguardar la independencia política del país de una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos. Claramente, Díaz confiaba en que los empresarios, financieros y políticos norteamericanos tendrían muchas cosas de qué preocuparse como para correr el riesgo de otra guerra mexicano-norteamericana, que podía arruinar definitivamente a México. Por otro lado, los adversarios de Díaz hacían hincapié en que las inversiones extranjeras masivas, a la larga, no sólo no disminuían el riesgo de una intervención extranjera, sino que lo incrementaban, puesto que si el gobierno mexicano se demostraba incapaz de mantener la estabilidad deseada por los inversores, éstos podrían constituirse en un poderoso grupo de presión a favor de la intervención en México.

Díaz logró también, en los últimos años de su primer mandato, restablecer las relaciones diplomáticas con Francia. Este paso no resultó nada fácil dada la intervención de Napoleón en México. Algunos sectores en el interior de México presionaban para lograr que se exigiera a Francia no sólo que olvidara sus posibles aspiraciones, sino que además pagara una alta indemnización como paso previo a la reanudación de las relaciones entre ambos países. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano había afirmado en repetidas ocasiones que el restablecimiento de relaciones tendría lugar sólo en el caso de que la iniciativa viniera de Francia. Aunque la caída de Napoleón en 1870 y la proclamación de la República francesa creó una situación más favorable para el restablecimiento de relaciones, habían de pasar diez años antes de que llegara a producirse el intercambio de embajadores oficiales entre ambos países. Finalmente, el restablecimiento de relaciones tuvo lugar en 1880, cuando los franceses renunciaron a todas sus pretensiones sobre México y el gobierno mexicano abandonó la idea de obtener reparaciones de Francia. Con el restablecimiento de relaciones, Díaz buscaba crear un contrapeso económico con los Estados Unidos y otras potencias europeas. El capital francés y los banqueros franceses asumieron un papel fundamental en la creación del Banco Nacional de México y, en los últimos años, Francia se convirtió en una de las principales fuentes de préstamos a México.

Durante la época porfiriana e incluso después de ella, Francia fue algo más que «otro» país europeo a los ojos de la elite mexicana. La moda, la cultura y la arquitectura francesas eran los modelos que se debían imitar. El positivismo de Augusto Comte tuvo enorme influencia en la ideología del régimen, aunque se combinó con el darwinismo social de Herbert Spencer, que pronto lo ensombreció. Los ricos propietarios pasaban parte de su tiempo en París y la clase alta enviaba a sus hijos a escuelas francesas. El ejército mexicano recibió suministros de artillería francesas y algunos de sus más distinguidos oficiales estudiaron técnicas militares de este país. Cuando Díaz es derrocado definitivamente en 1911, se exilia a Francia.

EL INTERREGNO DE GONZÁLEZ, 1880-1884

Fiel a su promesa, Díaz no se presentó como candidato en 1880; en su lugar, se presentó su protegido el general Manuel González. Muchos se sorprendieron ante la ingenuidad cínica de la elección de Díaz, pues González era tenido por el más corrupto y el menos capacitado de sus protegidos. Precisamente por estas razones lo escogió, pues sabía que iba a ser un rival fácil al volver Díaz a presentarse en 1884.

González se distinguió por su corrupción, aunque los rumores de que se llevara todos los muebles del Palacio Nacional cuando se fue resultaron exagerados. González estaba lejos de ser el inepto con que frecuentemente se le identificó y reunió un hábil gabinete porfirista, pero él no era Porfirio Díaz. Durante su mandato intentó poner en práctica las tres ideas políticas fundamentales de su predecesor: concesiones a los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos, nuevo acercamiento a Europa, y el mantenimiento del orden interno a cualquier precio. De todas maneras, en general fue mucho menos hábil de lo que había sido Díaz a la hora de evitar que se produjeran profundos conflictos como resultado de sus esfuerzos por llevar a la práctica las tres estrategias simultáneamente.

En un intento por mantener y estimular el interés de los inversores extranjeros, especialmente de las compañías norteamericanas del ferrocarril, González aumentó el número de concesiones especiales que Díaz les había otorgado. A propuesta de González, el Congreso aprobó una nueva ley con el fin de estimular aún más el paso de las tierras públicas a manos privadas. La nueva ley permitió a González confiar a compañías privadas la tarea de inspeccionar las tierras públicas y recompensarlas con un tercio de la tierra que ellas determinarían como «públicas». No fue sorprendente que las compañías arremetieran duramente contra los derechos de los pequeños propietarios, muchos de los cuales habían cultivado esas tierras durante generaciones pero no podían presentar títulos de propiedad. Los beneficios tanto para los postores extranjeros como para los nativos fueron muchos; se pudieron adquirir muchas tierras públicas que antes no estaban en venta, y muchas tierras privadas, recalificadas como públicas, se pudieron comprar de una vez, ya no a través de plazos negociados con los propietarios de pequeñas parcelas.

Una concesión mayor aún que se hizo a los empresarios extranjeros vino de la decisión del gobierno mexicano de revocar el viejo código minero español que estipulaba que el propietario de un terreno no era dueño del mineral que hubiera en su propiedad. Esto significaba que los derechos mineros debían adquirirse separadamente de los de la superficie de la tierra, lo que implicaba que el Estado poseía una mayor parte de la riqueza del país. La nueva ley de 1884 puso fin a este reglamento, lo cual fue un alivio tanto para los propietarios mexicanos como para los inversores extranjeros.

Pero el grupo de inversores extranjeros más poderoso, el norteamericano, todavía quería más. Para González, el problema era que al atender las demandas norteamericanas estaba arriesgando las recién restablecidas relaciones con Europa. En 1882 el gobierno de los Estados Unidos propuso a México un acuerdo

recíproco especial, por el cual aumentarían las tarifas de importación sobre ciertas mercancías de cada uno de los países. Estados Unidos insinuó que seguir adelante con la construcción del ferrocarril en México no sería beneficioso y pararía los trabajos a no ser que se firmara este tratado. González no se mostró entusiasmado, pues este acuerdo no sólo afectaría al restablecimiento tanto tiempo buscado de las relaciones con Europa, sino que privaría al ya necesitado Tesoro de unos impuestos que le eran muy necesarios, pero cediendo a la presión estadounidense, el Congreso mexicano aprobó el tratado en 1883. Sin embargo, varios meses después el tema volvió a plantearse y se aprobó un nuevo tratado que otorgaba a Alemania el estatus de nación más favorecida, concediéndole, de hecho, las mismas reducciones en las tarifas y anulando muchas de las ventajas unilaterales que los Estados Unidos habían obtenido a través del tratado. El embajador estadounidense protestó enérgicamente, mientras que el ministro alemán advirtió directamente a González que de no mantener su acuerdo con Alemania podría arriesgar las relaciones de México con toda Europa. González se salvó a duras penas gracias a un acontecimiento inesperado: los agricultores norteamericanos, temiendo la competencia mexicana en los productos agrícolas, presionaron al Senado estadounidense para que rechazara el tratado.

En otras ocasiones, el deseo de mejorar las relaciones con Europa supuso un obstáculo para la estabilidad interna. Después de largas y complicadas negociaciones, González pudo convencer a Gran Bretaña para que restableciera las relaciones con México. A cambio, González reconoció la deuda de 15.400 millones de libras esterlinas que los anteriores gobiernos conservadores habían contraído con los obligacionistas británicos. El acuerdo se hizo público en 1884, en medio de una aguda crisis financiera, y se denunció en el Congreso. Los alborotadores se lanzaron a la calle y sólo se restableció la paz después de que sonó el entorchado de sables y se hizo fuego contra la densa multitud.

La administración González ha pasado a la historia como uno de los gobiernos más corruptos de México. Su fama es probablemente merecida, aunque la imagen negativa que la opinión pública tenía de González se debía en parte a la crisis económica que oprimía a México en 1884 y al esfuerzo consciente por parte de Porfirio Díaz para desacreditar a su sucesor. Como resultado de esta situación, se había desviado la atención de la profunda transformación que experimentó México entre 1880 y 1884. Los cambios legales que se han mencionado antes constituyen sólo una parte de la situación. La primera línea ferroviaria entre México y los Estados Unidos se inauguró en 1884; las inversiones norteamericanas crecían a ritmo sobrecogedor; por primera vez desde la derrota de Maximiliano, México tenía relaciones diplomáticas con todos los países europeos relevantes; la construcción del ferrocarril y la victoria final sobre los apaches, que tuvo lugar entre 1880 y 1884, abrió nuevos caminos a través de la frontera norte de México hacia lugares hasta entonces inaccesibles. A partir de entonces, bajo el mandato de Porfirio Díaz que fue elegido presidente de nuevo en 1884 y continuó en el cargo hasta 1911, México conoció su más profunda transformación económica, política y social desde su independencia en 1821.

EL RÉGIMEN DE DÍAZ, 1884-1900

Entre 1877 y 1900, la población de México aumentó desde algo menos de 10 millones hasta más de 15 millones. Durante este período no hubo ninguna nueva guerra que impidiera el crecimiento, y además una ligera mejora en el nivel de vida contribuyó a incrementar el número de habitantes. Las sequías y el hambre que antes afectaban periódicamente la vida económica de muchas regiones perdieron su impacto devastador gracias a que ahora había ferrocarriles para transportar alimentos a los pueblos hambrientos y para llevar la mano de obra excedente de algunas regiones hacia aquellas otras donde había demanda de ella. Sin embargo, la asistencia médica mejoró sólo marginalmente; aunque el número de médicos aumentó de 2.282 en 1895 a 3.021 en 1900, estaban concentrados en las ciudades, y así, la expectativa de vida en México continuó siendo mucho más baja que en Europa occidental y los Estados Unidos.

El aumento de la población se produjo de forma bastante desigual. Los estados fronterizos, que en años precedentes tenían poca densidad de habitantes, y las áreas urbanas, fueron los sectores en los que el aumento de la población fue más intenso. Entre 1877 y 1910 en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas la población aumentó en un 227 por 100. El crecimiento de las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón fue aún mayor. Este crecimiento fue debido fundamentalmente al incremento de la población nativa, ya que a pesar de los esfuerzos y esperanzas de la administración de Díaz, la inmigración continuó siendo mínima y preferentemente de comerciantes, empresarios y técnicos de clase media y alta. Los salarios en la industria eran demasiado bajos para atraer trabajadores europeos, excepto en el caso de algunos obreros cualificados que estaban muy bien remunerados. Los trabajadores agrícolas europeos no aceptaban los bajos sueldos ofrecidos por los hacendados mexicanos y mientras hubiera posibilidad de emigrar a los Estados Unidos, no veían ninguna razón para cruzar la frontera hacia el sur.

El desarrollo económico bajo el régimen de Díaz

Entre 1884 y 1900, México experimentó un rápido crecimiento económico. La inversión de capital extranjero —casi 1.200 millones de dólares— ayudó a elevar el producto nacional bruto a una tasa anual del 8 por 100. Era una tasa de crecimiento sin precedentes en la historia de México como nación independiente, que provocó también desigualdades sin precedentes: entre sistemas agrícolas equipados con la más moderna tecnología y otros donde se trabajaba con las técnicas más primitivas, entre el desarrollo de la industria ligera y la pesada; entre el control de la economía extranjera y la nacional, y entre la evolución de las distintas regiones.

El desarrollo económico fue más destacado en los sectores orientados hacia la exportación. La minería fue el sector que registró el crecimiento más rápido. Hasta la construcción del ferrocarril, la minería en México estaba restringida a los metales preciosos, especialmente plata y algo de oro, pues el transporte me-

dante mulas era demasiado caro para dedicarlo a otros minerales. El sistema ferroviario, que prácticamente era inexistente cuando Díaz llegó al poder por primera vez, comprendía 14.000 kilómetros de vía férrea al acabar el siglo y, como resultado, la extracción de cobre, zinc y plomo se hizo tan rentable como la de plata. La producción de plata se elevó de 607.037 kilogramos en 1877-1878 a 1.816.605 kilogramos en 1900-1901 (y 2.305.094 en 1910-1911). La producción de plomo empezó con 38.860 toneladas en 1891-1892 y creció hasta 79.011 toneladas en 1900-1901 (y 120.525 toneladas en 1910-1911). La producción de cobre aumentó de 6.483 toneladas en 1891-1892 a 28.208 toneladas en 1900-1901 (y 52.116 toneladas en 1910-1911). En agricultura, los cultivos comerciales aumentaron a pasos agigantados. El ejemplo más espectacular fue el henequén (sisal), cuya producción creció de 11.383 toneladas en 1877 a 78.787 en 1900 (y a 128.849 en 1910). El rendimiento del caucho, el guayule (un sustituto del caucho), el café y la cochinilla también fue extraordinariamente elevado. Algunas industrias de exportación empezaron a ganar terreno en México. En 1891 los Estados Unidos aprobaron la tarifa McKinley que imponía altas tasas aduaneras sobre los minerales importados no procesados. Las tarifas por metales procesados eran mucho más bajas y como resultado las mayores empresas de los Estados Unidos, entre ellas la American Smelting and Refining Company de Guggenheim, establecieron fundiciones en México.

El desarrollo económico fue rápido hasta el final del siglo para la industria ligera orientada al consumo interno y prosperaron las industrias textiles. Cuando el valor de la plata, en que se basaba la moneda mexicana, empezó a caer en la década de los ochenta, las importaciones textiles se hicieron caras, y los comerciantes franceses que trataban con esta mercancía se empezaron a dedicar a la manufacturación textil dentro de México, plantas enormes, como la de Río Blanco, se extendieron por las regiones de Puebla y Orizaba. Se construyeron plantas de industria ligera para la producción de papel, cristal, zapatos, cerveza y procesamiento de alimentos. La industria pesada quedó rezagada y sólo después de empezar el nuevo siglo se recuperó. En 1902, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero construyó una planta de acero en Monterrey que hacia 1910 estaba produciendo 72.000 toneladas anualmente.

Después de 1900 el desarrollo industrial decayó notablemente. Esto se debió en parte a la caída del nivel de vida que se produjo en los primeros años del nuevo siglo, que frenó el aumento de la demanda de productos industriales. Además, el crecimiento industrial se vio limitado por la política gubernamental de la administración de Díaz, que no cambió de actitud para ayudar a los productores nacionales que estaban luchando por prosperar. Aunque la ley de Nuevas Industrias de 1881 concedió importantes exenciones fiscales a industrias locales que empezaban y acordó algunas tarifas de protección para algunas de éstas, como las textiles, nunca proporcionó a la industria pesada la protección especial que le concedían los países europeos. Por ejemplo, no se forzó a los empresarios norteamericanos del ferrocarril a comprar a los productores mexicanos el material que utilizaban, ni se dieron facilidades a la industria pesada para acceder a la concesión de créditos.

La industria, a diferencia del ferrocarril, nunca recibió ayudas. El gobierno de Díaz no tenía planes para fomentar el desarrollo de ninguna industria en parti-

cular, ni tenía un programa para estimular la importación de tecnología, ni una política para proteger a las industrias incipientes. Sobre todo, las inversiones del gobierno de Díaz en lo que se podría denominar capital humano eran muy limitadas. A pesar de que los gastos en educación aumentaron de hecho durante el Porfiriato, los resultados tuvieron un alcance muy limitado. Entre 1895 y 1910 el porcentaje de la población que sabía leer y escribir aumentó del 14,39 al 19,79 por 100. El papel asignado a la educación pública a nivel profesional, dirigida a la preparación de obreros cualificados, fue insignificante. De 1900 a 1907 la matriculación en las escuelas profesionales aumentó de 720 a 1.062.

Durante el Porfiriato se originaron serios conflictos en el sector agrícola, localizados no tanto en el de la producción de bienes (la exportación de cosechas y la producción de alimentos básicos aumentaron, aunque en diferente proporción), como en el nivel de modernización técnica. Aunque se produjo cierta revolución tecnológica en plantaciones de productos de gran demanda como el henequén (sisal) y el azúcar, las haciendas productoras de trigo y maíz todavía utilizaban técnicas anticuadas y tradicionales. El origen de la negativa de estos propietarios a modernizarse se ha atribuido frecuentemente más a razones psicológicas que a motivos económicos. Se dice que los hacendados tenían una mentalidad básicamente feudal y que consideraban la tierra como un símbolo de un estatus más que como una fuente de remuneración económica. Estaban demasiado preocupados codeándose con la *haute couture* de París, visitando los balnearios de Gstaad (y Garmisch Partenkirchen), y jugando en Montecarlo como para prestar atención a los asuntos de sus fincas. Sin embargo, esta interpretación no explica por qué las personas, a quienes mientras tanto habían confiado estas fincas, no tomaron las medidas que parecían más oportunas para obtener beneficios.

Los avances tecnológicos que llevaron a la modernización y al abaratamiento de la producción agrícola en los Estados Unidos no tuvieron la misma importancia en un país como México, donde había abundancia de mano de obra barata. A este respecto, en 1911 uno de los expertos agrícolas de México, Lauro Viadas, comparó el costo que suponía para un agricultor norteamericano trabajar con maquinaria agrícola moderna y para un hacendado mexicano con técnicas más primitivas pero empleando mano de obra barata; la producción de similar cantidad de trigo costaba al agricultor norteamericano 4,95 pesos y al mexicano 4,50.

Aparte de la disparidad existente entre la producción destinada al consumo interno y la destinada a la exportación, surgió otra notable desproporción como resultado del rápido crecimiento económico: la diferencia entre el control nacional y extranjero de la economía. Con excepción de la agricultura, los sectores más importantes de la economía estaban en manos extranjeras. Hasta el final del siglo XIX, el gobierno de Díaz no hizo ningún intento por estimular el control nacional sobre algún sector económico, ni siquiera para obtener una posible participación en él.

Aunque la administración de Díaz no pareció mostrar especial interés por lograr una mayor participación nacional en el control de las nuevas empresas que iban surgiendo, no se puede decir lo mismo respecto a su actitud hacia el control norteamericano que se estaba enfrentando al europeo en importantes sectores económicos. El gobierno de Díaz hizo todo lo que estuvo en su mano para fomentar las inversiones europeas sin restringir las estadounidenses. Hasta el final de siglo,

sólo se hacían préstamos a Europa y sólo se otorgaban concesiones bancarias a banqueros europeos. Proyectos de obras públicas, como las instalaciones del puerto de Veracruz o las obras de drenaje en el valle de México, se encargaron a empresas británicas, sobre todo las que eran propiedad de un joven pero altamente cualificado empresario y político británico, sir Weetman Pearson.

En general, aunque esta política del gobierno mexicano contribuía fundamentalmente a estimular la penetración económica europea en el país, no produjo ningún conflicto importante entre los europeos y los norteamericanos hasta finales del siglo XIX. Los Estados Unidos eran todavía una nación principalmente deudora, no acreedora y los mayores bancos norteamericanos tenían como objetivo prioritario la inversión dentro de los Estados Unidos, de manera que no se resintieron de la inversión europea ni de su irrupción en el sistema financiero mexicano. Incluso en aquellos sectores en los que tanto los europeos (especialmente británicos) como los norteamericanos compartían intereses (como eran el ferrocarril y las minas), se había establecido cierta división del trabajo, concentrándose los británicos básicamente en la parte central y sur de México, mientras el capital estadounidense se encauzaba sobre todo hacia el norte del país.

El conflicto más grave que por razones de influencia económica se produjo en México antes de finales del siglo XIX, no tuvo por protagonistas a británicos y norteamericanos, sino a franceses y alemanes, cuyos intereses en México eran mucho menores. El primer punto de conflicto entre ellos fue el tema del comercio mexicano con el extranjero que hasta la década de 1870 había estado controlado por comerciantes alemanes desde las ciudades hanseáticas de Hamburgo, Bremen y Lübeck. En la década de 1870, los comerciantes franceses, desde Barcelonnette (cuya calle principal se sigue llamando hoy *avenue Porfirio Díaz*) desplazaron a sus rivales alemanes. Esta fue la primera batalla de lo que sería la larga e intensa lucha franco-alemana dentro de México. Pocos años más tarde, la competición franco-alemana aparece en su más alto nivel. En 1888 el gobierno mexicano firma el primero de los más importantes préstamos con un banco extranjero desde la caída del gobierno de Maximiliano. Fue el acuerdo con el banco alemán Bleichroeder, que también manejaba las finanzas personales del canciller alemán Bismarck. A través de este tratado, los alemanes no sólo se aseguraron ventajosísimos tipos de interés, sino que también forzaron al gobierno mexicano a firmar un pacto secreto que prácticamente concedía a la compañía un monopolio sobre las finanzas externas del país. El gobierno mexicano no podría pedir ningún crédito sin hacer primero una oferta a la casa Bleichroeder. Aunque México aceptó las duras condiciones propuestas por los alemanes, seis años después, con ayuda francesa, consiguió romper el acuerdo y el dominio que éste suponía sobre las finanzas mexicanas.

Pero hubo otro campo en el que los franceses lograron victorias aún más significativas sobre sus rivales alemanes. Este campo era el lucrativo mercado de venta de armas en el que los fabricantes alemanes y franceses estaban compitiendo no sólo en México sino en toda Latinoamérica. La empresa alemana más importante en este campo era la casa Krupp, que prosperaba en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. En México, sin embargo, a pesar de sus intensos esfuerzos por venderle artillería al ejército, los franceses de Saint Chamond le ganaron el terreno.

Estos conflictos, que se prolongaron hasta finales del siglo XIX, no fueron cruciales para el gobierno mexicano; sin embargo, la confrontación surgida a comienzos del siglo XX entre las dos mayores potencias interesadas en México, los Estados Unidos y Gran Bretaña, a diferencia de la rivalidad entre franceses y alemanes, tendrá importantes y largas consecuencias para el país.

Diferencias regionales en el desarrollo de México

Otro desequilibrio que el desarrollo porfirista contribuyó a agudizar fue la progresiva desigualdad regional entre el centro, el sur y el norte mexicanos; el fenómeno no era nuevo, de hecho se remontaba a los orígenes de la civilización en cada región. Mucho antes de la conquista europea, se había desarrollado en las regiones central y sur de México una agricultura intensiva, con grandes ciudades, una sociedad altamente estratificada y con una compleja cultura, mientras el norte estaba habitado por cazadores y recolectores nómadas y algunos agricultores primitivos. La llegada de los españoles aportó nuevas diferencias en esas regiones: el sureste se convirtió en una zona marginal para la economía de Nueva España porque allí no se encontraron minas; el norte, en cambio, pasó a ser esencial para la colonia. Allí se descubrieron después de la conquista algunas de las minas más ricas, pero, por desgracia para los españoles, no fueron capaces de poblar estas comarcas y los constantes e implacables ataques de los indios nómadas, sobre todo de los apaches en el siglo XVIII, que continuaron en el período de la independencia, retrasaron considerablemente el desarrollo económico de la zona. Durante el Porfiriato, el norte y el sureste de México experimentaron un auge económico y fueron absorbidos por el mercado mundial.

El sureste empezó a asumir rasgos característicos de la América Central y el Caribe. La economía de la mayoría de los estados del sureste se caracterizaba por una escasa diversificación agrícola y aún menos industrial, dedicándose a la exportación de uno o dos productos. La península de Yucatán es el ejemplo más notable de este tipo de desarrollo. En Yucatán, el agave o henequén, como se llama en México, había sido siempre una cosecha importante, pero como se utilizaba principalmente para hacer sogas y cuerdas, su uso y su mercado eran limitados. Pero cuando las segadoras McCormick empezaron a emplearlo en la década de los ochenta, la demanda aumentó asombrosamente y Yucatán conoció el auge de la exportación. Los propietarios de las haciendas que cultivaban henequén y de los ferrocarriles que lo transportaban desde el interior del Yucatán hasta la costa eran mexicanos. Los compradores y transformadores de la fibra, de los cuales la empresa más importante era la compañía norteamericana American Peabody Company, compitieron por el henequén, pero a finales de siglo la mayoría de las compañías se habían fundido en un gran consorcio: la International Harvester Corporation, con base en Chicago, que pronto llegó a dominar el mercado y en cooperación con compañías mercantiles locales intentó manipular el precio del henequén en su provecho.

La situación en Yucatán, donde prácticamente toda la propiedad de la tierra estaba en manos mexicanas, era diferente de la situación en otros estados del sureste, especialmente Chiapas y Tabasco. En estos estados, las materias primas

como el caucho y, en menor grado, el café, eran producidas directamente por empresas extranjeras. El punto en común entre estos estados y Yucatán era el que su economía estaba basada en una o dos cosechas y que dependía plenamente de las condiciones del mercado mundial.

Al igual que el sureste periférico, la periferia del norte de México experimentó un rápido desarrollo económico que se orientó en gran medida hacia el mercado mundial. De todas maneras, el parecido entre las dos regiones no pasó de ahí, pues en contraste con el sureste, el norte tenía una economía mucho más diversificada, y exportaba gran variedad de minerales: cobre, estaño, plata y artículos de consumo como garbanzos, ganado y madera aserrada. Además, en contraste con lo que ocurría en el sureste, un sector mucho mayor de la economía del norte estaba destinado a producir para el mercado interno. Este era el caso, sobre todo, de los nuevos y altamente productivos campos de algodón con sistemas de irrigación situados en la región de Laguna en los estados de Coahuila y Durango. En relación con el resto de la economía nacional, el desarrollo industrial era mucho más importante en el norte que en el resto de las regiones de México. Se desarrolló una industria del acero en la ciudad de Monterrey y en el norte se construyeron fundiciones para minerales de propiedad mexicana y norteamericana. Se extendieron por muchas haciendas las industrias de procesamiento de alimentos, de manera que en muchos aspectos la economía en el norte era la más equilibrada del país. Y, a pesar de que la inversión extranjera era mucho más relevante en el norte que en el sureste, el norte, no obstante, era una de las zonas del país donde el capital mexicano desempeñó un papel importante, aunque generalmente subordinado, en el desarrollo de nuevas industrias (con excepción de la minería) y de cosechas de gran demanda, durante la época de Porfirio Díaz.

Fue en las vastas regiones de México central donde, en términos generales, la economía experimentó los menores cambios. Este fue, sobre todo, el caso de las grandes fincas productoras de maíz y trigo. Esta lenta evolución constituía un duro contraste con el rápido desarrollo industrial en el valle de México y sus cercanías, y con los nuevos centros industriales de los estados de Puebla y Veracruz.

A los ojos de muchos intelectuales porfiristas, estas profundas transformaciones económicas sentaron las bases para la transformación de México en una nación moderna e independiente según el modelo de la Europa occidental o de los Estados Unidos, pero lo que realmente se modeló fue un país que dependía, en un grado sin precedentes, de las inversiones extranjeras. Esta dependencia mostraba dos aspectos diferentes pero complementarios: por una parte, la manifestación más evidente era el dominio o la propiedad extranjera de importantes sectores, no agrícolas, de la economía mexicana, como los bancos, la minería, la industria y los transportes. Por otra parte, México se convirtió en el clásico ejemplo de país subdesarrollado productor de materias primas que depende de los mercados del norte industrializado.

La transformación política de México

En los años posteriores a 1884 el régimen de Díaz se convirtió en la primera dictadura real y duradera que había surgido en México desde la independencia.

Durante su segundo mandato, Díaz impidió que ninguno de sus opositores fuera elegido para el Congreso. En 1888 el Congreso se había transformado a todos los efectos en una institución inútil, ya que cada candidato tenía que recibir la aprobación previa del presidente para poder ser elegido o reelegido. El Congreso, ahora servil, aprobó enmiendas a la Constitución para que Díaz pudiera «satisfacer» los deseos de la población y ser reelegido en 1888, en 1892 (año en que se cambió la Constitución para extender el período presidencial a seis años), en 1898, en 1904 y en 1910. La prensa mexicana de la oposición, antes combativa, que en muchas ocasiones unía la crítica al gobierno con la brillantez literaria, fue amordazada y controlada, aunque cierta oposición brilló de vez en cuando en periódicos de corta tirada.

La consolidación de la dictadura estuvo fuertemente ligada a dos hechos: el logro de la estabilidad interna (la *Pax Porfiriana*) y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. Estos hechos, a su vez, estaban estrechamente relacionados con el desarrollo económico del país.

La «pacificación» del país fue un proceso multifacético y complejo que hasta 1900 logró notables victorias, aunque no el triunfo definitivo, y que constituyó el mayor motivo de orgullo para los ideólogos porfiristas. Los conflictos que constantemente surgían en México antes del período porfirista tenían muy diversos orígenes: golpes militares, levantamientos de caudillos, bandolerismo en el campo, ataques de los indios nómadas y revueltas campesinas y de las tribus indias de la frontera. Al terminar el siglo XIX sólo había dos formas de violencia todavía endémicas en México: las revueltas de los grupos indios en la frontera y las de las comunidades campesinas que estaban dispersas, principalmente en el norte. Los otros tipos de violencia habían desaparecido por completo o se habían apaciguado en gran medida.

Esta disminución de los niveles de violencia estaba estrechamente ligada a la formación del Estado mexicano, y la condición previa para el desarrollo del Estado porfiriano era el constante incremento de la renta pública. Díaz no quiso servirse de los mismos medios mediante los cuales los anteriores gobiernos habían procurado aumentar sus ingresos (créditos forzados o impuestos más altos), puesto que tales métodos ahuyentaban a los inversores extranjeros y enfrentaban a la oligarquía nacional. Las rentas públicas en el período de Díaz procedían principalmente de los impuestos limitados pagados por las empresas extranjeras, del impuesto aduanero cobrado a las mercancías que entraban en el país y al impuesto sobre los metales preciosos. Todas estas contribuciones dependían del crecimiento de las inversiones extranjeras y de la mejora del tipo de interés sobre el crédito internacional, que permitiría a México conseguir más préstamos en mejores condiciones. Díaz, aparte de atraer inversores extranjeros, con el fin de aumentar la renta pública trató de delinear y modernizar la administración financiera del país. Este intento de modernización, que ya había sido iniciado en la época de Juárez, tuvo como verdadero artífice de su actualización a uno de los mejores financieros del país, José Yves Limantour, a quien Porfirio Díaz nombró ministro de Hacienda en mayo de 1893. En 1896, por primera vez en la historia de México, Limantour había logrado equilibrar el presupuesto, lo cual a su vez aumentó extraordinariamente la solvencia de México y los créditos internacionales no sólo fueron más fáciles de conseguir, sino que ahora

el régimen de Díaz los podía lograr con tipos de interés mucho más ventajosos que antes.

Con un apoyo financiero tan sólido, Díaz estaba en buenas condiciones para poder dedicarse a apretar las riendas a los grupos más rebeldes y de pensamiento más independentista del país. Uno de estos grupos era el de los caciques regionales que gobernaban sus provincias como si fueran reinos feudales. El primer paso que dio Díaz fue reemplazar a muchos de los hombres todopoderosos que quedaban de otra época, como Luis Terrazas en Chihuahua e Ignacio Pesqueira en Sonora, por hombres leales a él. No había nada de nuevo en su estrategia, ya que prácticamente todos sus predecesores habían hecho lo mismo cuando pudieron. Desafortunadamente para el gobierno, en el pasado ya se había comprobado con bastante frecuencia que el remedio era temporal, puesto que una vez instalados firmemente en el poder, los nuevos caciques tendían a reproducir el mismo tipo de autonomía de que disfrutaron sus antecesores. Y es más, usualmente estos antecesores desposeídos permanecían agazapados en las sombras, a la espera, buscando una oportunidad para derrocar al régimen que los había desbancado. Como resultado, la estabilidad política se mantenía de forma precaria y eran frecuentes las luchas entre los caciques rivales e incluso los conflictos entre los recién nombrados caciques y el gobierno federal. Con Díaz, el sistema funcionó mucho mejor, porque el ferrocarril recién construido permitió que el ejército llegara rápidamente hasta las provincias y ayudara a dominar a los posibles rebeldes.

Quizá más importante aún fue el hecho de que Díaz estimuló, o al menos permitió, tanto a los caciques en el poder como a los que habían sido destituidos, enriquecerse actuando como intermediarios de los inversores extranjeros que quisieran instalarse o adquirir propiedades en aquellas regiones. De esta manera, Díaz dio a los miembros de la oligarquía local, tanto a los entrantes como a los salientes, un poderoso papel en el mantenimiento de la estabilidad en su región, ya que cualquier levantamiento, cualquier revuelta local podía ahuyentar fácilmente a los posibles inversores, cortando de esta manera una importante fuente de ingresos de la oligarquía local.

Hubo otros dos métodos por medio de los cuales Díaz trató de contrarrestar los posibles alzamientos de los hombres fuertes locales: uno fue nombrar como vigilantes de los funcionarios civiles locales a comandantes militares que no fueran originarios de las regiones que controlaban; el otro método fue elevar de categoría el cargo de «jefe político» correspondiente a los administradores de distrito, que antes de Díaz habían sido oficiales con poder limitado, y ahora iban a controlar la policía y las fuerzas armadas auxiliares en sus distritos, iban a nombrar a los oficiales de distrito y municipales, y a abrir el camino a los inversores extranjeros, y que en un buen número de casos debían obediencia en primer lugar al gobierno central y no a los gobernadores de los que eran directamente subordinados.

Díaz aplicó una táctica similar, de favorecimiento combinado con represión, a un segundo grupo que durante mucho tiempo se había opuesto a la existencia de un gobierno central fuerte. Este grupo era la clase media que actuaba principalmente en Ciudad de México. Tradicionalmente, este grupo desempeñaba un papel importante en el Congreso mexicano y editaba los más importantes periódicos de la oposición. Díaz impidió que los miembros de la oposición fueran

elegidos para formar parte del Congreso y continuó la política iniciada durante la administración de González de considerar fuera de la ley a todos los periódicos de la oposición. La clase media no se opuso a estas medidas represivas ya que, al mismo tiempo, a cientos de sus miembros se les estaban concediendo nuevas oportunidades de progreso social y económico. Un ejemplo de esto fue el aumento del número de puestos burocráticos estatales que creció considerablemente entre 1884 y 1900, así como el hecho de que en aquellos estados en los que Díaz había destituido a los caciques locales se ofrecieran nuevos cargos a la clase media. Por otra parte, la destitución de los hombres fuertes locales o caciques rara vez supuso su total eliminación de la esfera política; por ejemplo, Luis Terrazas, el hombre fuerte de Chihuahua, continuó desempeñando un papel importante en la política local y organizó un poderoso grupo político que Díaz se vio obligado a tolerar y que se oponía a la existencia de la estructura política en el estado. Como resultado, surgió una especie de sistema bipartidista en Chihuahua al igual que en otros estados, mientras que en Ciudad de México los restos de la democracia estaban siendo destruidos poco a poco. Este sistema, a su vez, dio a las clases medias regionales mayor influencia política ya que ambos partidos se disputaban su apoyo.

Estos «partidos» eran sólo de ámbito regional y se parecían más a los grupos formados por relaciones de parentesco o clientelismo que a los partidos políticos que se estaban desarrollando durante este mismo período en Europa. Díaz no sólo nunca permitió la creación de verdaderos partidos de oposición, sino que se opuso igualmente a la creación de un partido político gubernamental. En 1891 algunos intelectuales y miembros de la clase alta adictos al régimen intentaron consolidar el sistema porfirista a través de la creación de un partido liberal basado en los principios «científicos» del positivismo (por lo cual se conoció a estos hombres como los científicos). Su objetivo era ensanchar la base del régimen para fortalecerlo, al tiempo que imponer cierto control sobre el propio Díaz. Por otra parte, la creación del partido podría asegurar algún tipo de sistema de sucesión y prevenir lo que más temía la mayoría de la elite mexicana: la reanudación en el país de las rebeliones y las luchas una vez que Díaz muriera o fuera incapaz de terminar su mandato.

De cualquier manera, el presidente se negó a la formación de un partido político y prefirió continuar con la táctica que había empezado a aplicar con éxito a partir de su llegada al poder en 1876, que era la de enfrentar entre sí a las diferentes camarillas existentes dentro de la elite mexicana. Una de estas camarillas estaba liderada por Manuel Romero Rubio, que había sido ministro en el gobierno de Lerdo y que posteriormente se unió a Díaz, y llegó a ser ministro de Gobernación en su gobierno en 1884. Romero Rubio fue, en muchos aspectos, el arquitecto del Estado porfirista. Él fue quien transformó la institución de «jefe político» y quien controló y manipuló a los gobernadores. El grupo que él lideraba estaba formado principalmente por civiles: financieros, terratenientes, tecnócratas, burócratas y similares. Después de su muerte en 1895, el más sobresaliente e inteligente de sus discípulos, José Yves Limantour, ministro de Hacienda desde 1893, fue reconocido como cabecilla del grupo, al que se oponía una camarilla dirigida por militares. Su principal portavoz era el anterior presidente Manuel González durante los años que siguieron a la toma del poder por Díaz, y

posteriormente pasó a ser el líder Bernardo Reyes, uno de los más cercanos confidentes de Díaz. El grupo estaba formado por militares camaradas del presidente, por hombres tradicionalmente fuertes en las regiones y por algunos burócratas, y era extremadamente crítico frente al progresivo aumento de poder e influencia de los científicos.

Díaz utilizó ante el ejército, que durante todo el siglo XIX había sido una amenaza constante para cualquier gobierno central, el mismo método empleado para pacificar a los hombres fuertes locales; es decir, la combinación de represión e incentivos. Por una parte, aumentó el presupuesto militar (en términos absolutos, no relativos), compró armamento moderno en Europa, y dio importantes puestos políticos a muchos jefes militares permitiéndoles entrar en la nómina. Además, creó una academia militar moderna donde se propuso formar un cuerpo de oficiales de elite. Por otra parte, Díaz debilitó la influencia del ejército a través de la creación de otras fuerzas paramilitares que frecuentemente eran más eficaces que el ejército. Gran parte de la represión interna, por ejemplo, corría a cargo de tropas auxiliares que no estaban subordinadas directamente al ejército. Entre estas fuerzas, una de las más importantes eran los Rurales nacionales, un cuerpo de policía profesional que ya existía antes de Díaz pero al que éste dio el impulso necesario para acrecentar su fuerza e influencia. Los soldados regulares llegaban forzados al ejército y estaban mal pagados, por lo cual mantenían sólo un relativo sentimiento de lealtad a la institución. Los Rurales, al contrario, estaban mucho mejor pagados y recibían mejor trato. Aunque en menor grado que los Rurales nacionales, los Rurales estatales también estaban mejor pagados y recibían mejor trato que los soldados regulares del ejército. Los Rurales estatales eran unidades armadas que dependían directamente de la administración estatal, pero cuya máxima autoridad provenía del gobierno federal. Al mismo tiempo, Díaz incorporó a algunos de los más destacados bandoleros a ciertas unidades policiales con el fin de encauzar sus energías y utilizar su experiencia en su provecho. Pero no fueron Díaz ni el Estado central por sí solos los que pusieron fin al bandolerismo. Los hombres fuertes locales, que frecuentemente habían estado asociados con estos hombres fuera de la ley o que al menos habían hecho la vista gorda ante sus crímenes siempre y cuando sus propiedades no se vieran afectadas, ahora descubrían que estos mismos bandoleros podían suponer un freno a la corriente de inversiones extranjeras que llegaba a sus distritos, lo que sería matar a la gallina de los huevos de oro. Por ello, frecuentemente fue de importancia decisiva su activa colaboración con el gobierno para reprimirlos.

La política de represión, conciliación y cooperación llevada a cabo por Díaz frente a las clases media y alta que habían sido las fuerzas originarias de los levantamientos y la inestabilidad en los primeros años del siglo XIX fue aplicada también para controlar a otra fuerza que durante algún tiempo había sido una de las principales amenazas para todo gobierno liberal: la Iglesia católica. Díaz no siguió adelante con las medidas anticlericales de Lerdo, y aunque el gobierno de Díaz nunca abolió las restricciones legales que las leyes de reforma habían impuesto a la Iglesia ni le devolvió sus antiguas propiedades, en la práctica se estaba produciendo un cambio de política. De muchas maneras subrepticias, que por otra parte no eran difíciles de detectar, la Iglesia estaba acumulando nuevamente riquezas procedentes tanto de inversiones como de donaciones de sus fie-

les, mientras que el gobierno no hacía ningún intento de cortar el proceso. Se permitió la publicación de más de veintitrés periódicos que mantenían estrecha relación con la Iglesia y los colegios religiosos se multiplicaron a lo largo y ancho de México. El matrimonio de Díaz con Carmen Romero Rubio, una devota católica que mantenía inmejorables relaciones con la jerarquía eclesiástica, así como las cordiales relaciones entre obispos como monseñor Gillow de Oaxaca y altos oficiales de la administración, acabarán por sellar la reconciliación entre la Iglesia y el Estado.

A lo largo de este período, la principal amenaza para la Iglesia no venía del Estado sino de los misioneros protestantes y de los movimientos disidentes que se producían en el campo. Cuando las inversiones norteamericanas y la inmigración hacia México crecieron, también aumentó el número de misioneros norteamericanos que fueron especialmente activos en la parte norte del país. En Chihuahua, los misioneros metodistas incluso llegaron hasta pueblos remotos y su influencia fue muy elevada sobre los campesinos. Como resultado, muchos miembros de la Iglesia se hicieron cada vez más nacionalistas y cada vez más antinorteamericanos.

Pero, tal vez, un peligro mayor para la Iglesia fueron los movimientos de disidencia que surgieron entre el campesinado. Estos movimientos habían existido siempre, pero mientras el catolicismo fue la religión oficial del Estado la Iglesia había tenido medios para reprimirlos. Sin embargo, ahora las posibilidades de enfrentarse a los hombres y mujeres «santos» y «sagrados» que surgían en diferentes partes del país, en clara oposición a la Iglesia, estaban duramente recortadas. En el estado de Sonora, por ejemplo, miles de personas veneraban a una muchacha de 16 años, Teresita, conocida como la santa de Cabora, que curaba a los enfermos y se decía que hacía milagros. En Coahuilimpco, los indios del poblado creían que uno de ellos, a quien llamaban San Juan, era un santo, y en todo México central se escondían ídolos precolombinos y se los adoraba en cuevas.

El Estado sólo persiguió estos cultos si abogaban por cambios de tipo social o político; consiguientemente, se toleró a los misioneros protestantes con base en los Estados Unidos e incluso, a veces, contaron con el apoyo de las autoridades porfirianas. Una vez desprovista de la ayuda del Estado, la Iglesia tuvo que buscar nuevos caminos para hacer frente a sus enemigos religiosos. No bastaba con que los sacerdotes predicaran en contra de la idolatría, ya que muchos de los santos y rebeldes no eran sólo disidentes religiosos, sino también disidentes sociales. La necesidad de anticiparse a estos movimientos sociales, junto al efecto producido por la decimotercera encíclica *Rerum novarum*, del papa León XIII, llamando a la intervención de la Iglesia en los problemas sociales, encaminó a algunos sectores de ésta hacia el activismo social. El obispo de Tulancingo fue el principal defensor de esta nueva tendencia: con su ayuda se celebraron en los últimos años del Porfiriato varios congresos católicos para discutir el problema de los campesinos, y en una conferencia católica que tuvo lugar en 1903 en la ciudad de Tulancingo los seglares católicos pidieron a los hacendados la abolición del peonaje y la instrucción y escolarización de los campesinos. Al mismo tiempo, recomendaban a los campesinos aceptar el orden de cosas impuesto por Dios y no sublevarse en contra de sus superiores. Los periódicos de inspiración católica protesta-

ban frecuentemente contra la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. La nueva política de la Iglesia frente al campesinado estaba, sin duda, influida por el hecho de que había perdido sus tierras y ya no estaba, como a principios del siglo XIX, comprometida en el sistema de peonaje y otras formas de servidumbre campesina.

Aunque la Iglesia finalmente fracasó en su intento de estabilizar la situación en el campo, tuvo éxito en otros aspectos. Con el apoyo de Díaz consiguió cierta recuperación política y económica, al tiempo que logró un mayor apoyo entre el campesinado, lo cual quedó reflejado durante la Revolución cuando los agraristas más radicales, sobre todo los zapatistas en Morelos, no pusieron en marcha medidas anticlericales.

En general, el fortalecimiento del Estado porfirista costó a amplios sectores de la clase alta y media tradicional la pérdida de gran parte del poder político que antes poseían, pero, en compensación, participaron de los frutos del rápido desarrollo económico de México. No se puede decir lo mismo del campesinado, que durante el porfirato perdió sus derechos políticos tradicionales, al tiempo que sufrió agudas pérdidas económicas. Con frecuencia se ha afirmado que la abolición por parte de Díaz de las estructuras democráticas existentes en México fue una medida que apenas afectó a los campesinos. La mayoría de ellos era analfabeta y no podía leer los periódicos de la oposición, aun en el caso de que llegaran a los pueblos más lejanos, cosa que rara vez ocurría. Por otra parte, tampoco estaban interesados ni participaban en las elecciones nacionales.

Esto probablemente era cierto, pero había otro aspecto de la democracia en México que era de importancia decisiva para gran parte del campesinado: la autonomía local. Tradicionalmente, la mayoría de los pueblos elegía a sus consejos y alcaldes, que tenían poder no sólo político sino también económico. Eran los que distribuían el acceso a las tierras comunitarias, el agua y los pastos, además muchas veces resolvían conflictos dentro del pueblo y, a veces, decidían quién debía alistarse en el ejército y quién podía quedar exento del servicio militar. Los orígenes de la autonomía local se pueden remontar al período precolombino, cuando los poblados del sur y del centro de México eran en gran medida autosuficientes y tenían derechos políticos. La situación no terminó con la conquista española, sino que España permitió a muchas comunidades indígenas conservar sus tierras y sus instituciones comunales dándoles cierto grado de autonomía, aunque bajo la supervisión severa del Estado y los funcionarios eclesiásticos. Muchas comunidades de los estados de la frontera norte recibieron por parte del Estado central mayor libertad como un incentivo para asentarse en una región peligrosa y luchar contra los ataques de los indios. En general, el poder y la autonomía de estas comunidades tendió a aumentar después de la independencia. El gobierno federal era demasiado débil para imponer su autoridad sobre estos derechos tradicionales de los pueblos. Además, a diferencia del Estado colonial, el débil Estado nacional del siglo XIX no pudo ejercer el control efectivo sobre los caciques. Así pues, muchos de los caciques locales y regionales, que eran la única autoridad suficientemente poderosa como para imponerse a los consejos comunitarios y a los alcaldes, utilizaron su nuevo poder para gobernar por la fuerza a los pueblos. Otros muchos, en cambio, dudaron en atacar los derechos adquiridos de los campesinos. Los caciques regionales estuvieron a menudo invo-

lucrados en las interminables guerras civiles mexicanas y en momentos cruciales establecieron alianzas con otros pueblos para luchar contra sus rivales o contra el gobierno federal hostil. Así, intentaron equilibrar cierto grado de represión y control para tratar de ganarse la lealtad y el apoyo de muchos de los campesinos a los que dominaban. Esta situación cambió radicalmente en los últimos años del Porfirato.

La pacificación de la frontera norte

Durante el último cuarto del siglo XIX, el Estado mexicano empezó a asegurar su control sobre la frontera norte: Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango. La derrota infligida a los apaches y la construcción del ferrocarril incentivaron la llegada de masas de inmigrantes procedentes de los Estados Unidos y del sur de México. Más de 15.000 norteamericanos fueron a establecerse en la zona norte de México. Éstos eran semejantes en algunos aspectos a los norteamericanos que se expandieron durante este período por todo México. Como sus compatriotas en el sur y el centro de México, muchos de ellos eran ricos inversores o ejecutivos de grandes compañías. La American Smelting and Refining Company, que era propietaria de la mayoría de las minas y las fundiciones del norte de México, llevó consigo a muchos técnicos, y muchos administradores llegaron a México de la mano de hombres como William Randolph Hearst que los necesitaba para vigilar sus vastas posesiones en la región, y William C. Greene, que los precisaba para manejar el ganado y administrar su negocio de serrería. Sin embargo, muchos otros norteamericanos de los que llegaron a la frontera norte pertenecían a clases sociales con poca representación en el resto del país. Los que trabajaban en el ferrocarril norteamericano ocupaban los puestos más elevados no sólo en la administración sino en la división de operaciones del ferrocarril mexicano, sobre todo en el norte, mientras que los mineros norteamericanos constituían una parte importante de la fuerza de trabajo minera, especialmente en uno de los mayores centros mineros del país, en Cananea, Sonora. Estos obreros, cuyo estatus en los Estados Unidos no sería diferente al del resto de los obreros, en México constituían una minoría privilegiada, mejor pagada y mejor tratada que sus compañeros mexicanos.

Los cerca de 300.000 mexicanos que se asentaron en la frontera norte entre 1877 y 1910 tenían orígenes sociales diferentes. Algunos eran campesinos desplazados, otros artesanos arruinados, o aventureros en busca de fortuna. Su impacto en la demografía de la zona fue enorme: la población de Monterrey creció de 14.000 habitantes en 1877 a 78.528 en 1910, y el pueblo de Torreón, que en la década de 1870 contaba tan sólo con unos cientos de habitantes, se transformó en una de las ciudades más modernas y de más rápido crecimiento de México, pasando de tener una población de 23.000 habitantes en 1900 a tener 43.000 en 1910.

Los recién llegados al norte no desplazaron a la elite de la zona. Las grandes familias norteñas de hecho habían perdido parte de su poder político en favor del gobierno central y compartían el poder económico con los empresarios extranjeros, pero, en general, resurgieron muy fortalecidas por las transformacio-

nes que se estaban produciendo en la zona fronteriza. El clan Terrazas-Creel en Chihuahua, los Madero en Coahuila, los propietarios de fábricas de acero en Monterrey constituían el equivalente mexicano de los Rockefeller y los Guggenheim en los Estados Unidos.

A finales de siglo, el norte era, en términos económicos y sociales, una de las regiones más «modernas» de México. No sólo su economía era la más diversificada del país y el porcentaje de población rural era más bajo que en el resto de México, sino que, además, la tasa de alfabetización de la zona era la más alta. Las modernas relaciones capitalistas habían hecho desaparecer en gran medida las formas tradicionales de relación social en las áreas rurales. Hasta la década de 1890, a los peones de las grandes haciendas no se les pagaba en dinero efectivo, sino con vales que sólo servían para el intercambio con la tienda de la hacienda. Muchos peones estaban sujetos por deudas a las haciendas y, aunque no fuera así, la situación de inseguridad de la zona, las malas comunicaciones y las incursiones de los apaches hacían que fuera extremadamente difícil y peligroso para ellos dejar su lugar de residencia.

Pero después, el final de las guerras con los apaches, las nuevas comunicaciones establecidas con los Estados Unidos, las posibilidades que tuvieron muchos trabajadores agrícolas mexicanos, especialmente vaqueros, de encontrar trabajo en los Estados Unidos y la mala disposición, tanto de las autoridades norteamericanas y sus empresarios, como de las compañías mexicanas, a la hora de devolver a los peones evadidos a sus haciendas, hicieron el sistema de peones adscritos a la tierra cada vez más caro y menos provechoso en los estados fronterizos del norte de México. Como resultado, los propietarios de fincas mexicanas se vieron forzados a buscar otros métodos para mantener a sus vaqueros y trabajadores agrícolas en sus haciendas. Algunos propietarios, como los productores de algodón de los campos de Laguna con recientes sistemas de irrigación, pagaban los salarios agrícolas más altos de México; otros hicieron concesiones en aparcerías y en contratos de arrendamiento en términos mucho más favorables que en el resto del país: mientras en México central los contratos que predominaban ofrecían a los arrendatarios o a los aparceros, como mucho, un 50 por 100 de lo que ellos cultivaban, en el norte, usualmente, obtenían dos terceras partes. Se permitió a muchos vaqueros nortños tener su propio ganado y dejarlo pastar en los terrenos de la hacienda. Si permanecían un tiempo suficientemente largo en el mismo trabajo, fácilmente podían convertirse en caporales y ganar el doble de lo que ganaban antes. Algunos propietarios especialmente progresistas, como Francisco Madero en el estado de Coahuila, erigieron escuelas y clínicas en sus fincas y en épocas de hambre y malas cosechas alimentaron a la población de los pueblos cercanos.

Hasta finales del siglo XIX, los cambios económicos y sociales que produjeron México central y los Estados Unidos con su dominio político y económico sobre el norte mexicano, condujeron a mejoras sustanciales no sólo para la clase alta sino también para las clases media y baja de la sociedad. Sin embargo, el norte fue también la región con mayor violencia social y política durante el período porfirista. En algunos aspectos, hasta finales de siglo, estos conflictos se dieron entre lo que se podría llamar el sector moderno de la sociedad, por un lado, y los elementos «tradicionales» de la sociedad nortña, por otro. De cualquier

manera, el único grupo social que rechazó por completo prácticamente todas las características de la sociedad industrial moderna estaba formado por algunos de los aproximadamente 50.000 indios tarahumaras que vivían concentrados fundamentalmente en el estado de Chihuahua, muchos de ellos en lo más intrincado de la Sierra Madre, y que sólo de manera marginal se mezclaron en los conflictos sociales que ocuparon la atención del norte de México durante el Porfiriato y la Revolución de 1910 a 1920.

Los indios yaquis y los antiguos colonos militares de Chihuahua, que fueron los que más se resistieron a la modernización porfirista y que repetidamente se levantaron en armas contra las autoridades, constituían un sector tradicional en el sentido de que se aferraban a sus derechos adquiridos y a sus tierras. Sin embargo, no eran «tradicionales» si consideramos el término como sinónimo de oposición a la tecnología moderna, a la industria o a la producción para el mercado. Bajo el cuidado de los misioneros jesuitas durante el período colonial, los yaquis habían aprendido técnicas de agricultura intensiva complejas que habían aplicado con éxito a la tierra fértil del valle del río Yaqui. Muchos de sus productos se vendían en los mercados de las regiones mineras y, al mismo tiempo, muchos indios yaquis se fueron a trabajar lejos de su tierra natal a las minas y las haciendas y sus patrones los consideraban entre los trabajadores más dignos de confianza y con más experiencia.

Por otra parte, los antiguos colonos militares asentados principalmente en Chihuahua constituyeron durante el período colonial y el siglo XIX uno de los principales pilares de lo que se podría considerar una clase media agraria. No sólo poseían más tierras que la media de los campesinos en el centro y el sur del país, sino que además eran económicamente independientes. La razón de su independencia residía no sólo en que tenían suficientes tierras y ganado para subsistir, sino además en el hecho de que aun en el caso de que hubieran querido trabajar para las haciendas vecinas, la peligrosidad de las comunicaciones durante el período de guerra con los apaches habría hecho de ésta una opción muy poco atractiva. A diferencia de lo que ocurría en los pueblos del sur y del centro del país donde los campesinos habían poseído la tierra comunalmente hasta la ley de reforma de 1856 y no podían venderla, para los campesinos de los pueblos del norte la tierra era un bien que podían comprar y vender libremente.

La causa que llevó a los indios yaquis y a muchos de los antiguos colonos militares del norte a protagonizar una serie de levantamientos contra el régimen de Díaz no fue la oposición a la economía capitalista «moderna», sino la negativa a aceptar que esta economía se desarrollara a sus expensas. Los yaquis protagonizaron varias revueltas sangrientas contra las autoridades mexicanas cuando éstas intentaron confiscar gran parte de sus tierras fértiles en beneficio de la empresa norteamericana American Richardson Company. Para los colonos militares de Chihuahua, que en 1891-1893 se alzaron en armas contra el gobierno estatal y el régimen de Díaz, el problema de la tierra estaba intrínsecamente ligado a la tradición de la autonomía municipal. Las autoridades municipales, que ellos habían elegido libremente, habían sido sus principales instrumentos de defensa frente a todo tipo de ataque externo, contra sus tierras o contra su estatus social y económico. En 1891 el gobierno estatal redactó una nueva ley que permitía a los «jefes políticos» nombrar a los alcaldes de las ciudades más grandes. Mu-

chos pueblos en Chihuahua se levantaron en armas para impedir que las autoridades aplicaran esta ley. Estos pueblos tenían en común con los indios yaquis su extraordinaria capacidad de lucha, alimentada a lo largo de más de un siglo y medio por los enfrentamientos contra los apaches, y respaldada por la posesión de armas. Pero había también una diferencia sustancial entre los dos grupos: los yaquis estaban aislados por diferencias étnicas y sociales del resto de la población de Sonora. Los colonos militares, en cambio, tenían poderosas aunque secretas alianzas: algunos de los más pudientes propietarios en el estado, anteriores caudillos como Luis Terrazas, pretendieron servirse de los campesinos para ejercer presión sobre el gobierno.

Estas diferencias llevaron al gobierno de Díaz a aplicar tácticas muy diferentes en los dos casos. Después de tratar inútilmente durante años de convencer a los yaquis de que aceptaran la pérdida de la mayoría de su territorio y del fracaso de los intentos llevados a cabo para dominarlos mediante la realización de campañas militares cada vez más duras, el gobierno recurrió a la puesta en práctica de nuevas medidas de represión desconocidas hasta entonces. Entre 1903 y 1907 lanzó una campaña a gran escala contra los indios y deportó a un gran número de ellos, se resistieran al gobierno o no, a las plantaciones de henequén de Yucatán. Esta táctica no sólo diezmo la población yaqui, sino que además fue beneficiosa económicamente. El coronel Francisco B. Cruz que en el curso de tres años deportó a 15.700 yaquis a Yucatán, recibió 65 pesos por cabeza (hombre, mujer o niño) de manos de los hacendados; 10 pesos eran para él y 55 para el Ministerio de la Guerra.

Sin embargo, con los colonos militares rebeldes de Chihuahua, el gobierno se mostró más inclinado a llevar a cabo una política de compromisos, aunque éstos se negociaran con una élite de manipuladores más que con los propios campesinos. Como resultado de una serie de levantamientos en Chihuahua respaldados por Terrazas de 1891 a 1893, su rival, Lauro Carrillo, fue destituido del puesto de gobernador del estado y se colocó en su lugar a un hombre que a Terrazas le era más afín. A los campesinos, exceptuando la amnistía que se les concedió, se les hicieron concesiones mucho menores: cierta disminución en las expropiaciones de la tierra y el mantenimiento de algunos elementos de autonomía municipal. Aunque en la mayoría de los casos esta táctica tuvo éxito, no fue así en el caso más conocido, el del pequeño pueblo de Tomochi perdido en las montañas del oeste de Chihuahua. La rebelión que tuvo lugar allí, en noviembre de 1891, en un principio no se diferenció de otras muchas que se habían producido en otros pueblos del norte. Empezó siendo una revuelta en contra del nuevo alcalde impuesto, un sobrino del «jefe político» del distrito, que apacentaba sus ovejas en los pastos del pueblo y forzaba a sus habitantes a trabajar con bajos salarios en su propia tierra o en las fincas del ministro de Hacienda, José Yves Limantour, que estaban cerca del pueblo. Cuando algunos habitantes de Tomochi protestaron contra estos hechos, el alcalde les castigó con la leva, el temidísimo reclutamiento para el ejército. Su tío, el jefe del distrito, tomó represalias adicionales contra el pueblo trazando otro itinerario para el transporte anual de plata desde una mina próxima, que pasaba regularmente a través del pueblo hasta la ceca. Los exasperados aldeanos se rebelaron, expulsaron al alcalde y derrotaron a un destacamento de tropas gubernamentales enviado para sofocar a los sublevados.

Hasta aquí, la rebelión de Tomochi no se diferenciaba de las de docenas de otros pueblos del norte. El gobierno intentó pactar con los habitantes de Tomochi de la misma manera que lo había hecho con otros pueblos rebeldes. Se les ofreció una amnistía a cambio de reconocer la autoridad del jefe del distrito. Otros pueblos sublevados, viéndose aislados, habían aceptado, pero Tomochi no lo hizo. No se hacen pactos con Satanás, y a sus ojos, el gobierno venía a representar al diablo. Su rebelión estaba unida inextricablemente a visiones mesiánicas. Los cabecillas del pueblo, Cruz y Manuel Chávez, eran seguidores del culto de la joven de 16 años, Teresita, la santa de Cabora, y así, los pobladores de Tomochi sintieron que teniendo a Dios de su lado no tenían por qué temer un encuentro frontal con las tropas del gobierno. Después de que los más o menos 80 hombres del pueblo hubieron aniquilado por dos veces a los más de 500 soldados enviados a luchar contra ellos, finalmente un ataque federal con una tropa de 1.200 hombres redujo el pueblo a astillas. El cabecilla, Cruz Chávez, fue fusilado junto con todos los hombres supervivientes de Tomochi. Por su parte, el gobierno sufrió cerca de 500 víctimas. Pronto se extendieron por todo Chihuahua leyendas acerca de esta rebelión.

Debido a las bajas sufridas en ambos bandos, fue más bien una victoria con características de derrota. El gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en su política aminorando el paso, al menos por una vez, en las expropiaciones de la tierra y en sus ataques a la autonomía rural. Como resultado de este cambio en la política, los levantamientos campesinos en Chihuahua comenzaron a disminuir. A finales de siglo, el régimen de Díaz creyó que tenía controlada la situación en el norte, ya que, exceptuando la región yaqui, el nivel de violencia descendió y parecía que los caudillos habían otorgado su apoyo sin reservas al gobierno, pero esto era sólo un respiro. A principios del siglo XX los conflictos entre los sectores moderno y tradicional se recrudecieron una vez más, complicándose ahora con la aparición de agudas tensiones dentro del propio sector moderno. Los elementos subversivos existentes dentro de ambos grupos iban a hacer caer finalmente al régimen de Díaz y a invadir todo México entre 1910 y 1920.

La expropiación de las tierras de los campesinos en el sur y el centro

Incluso en la época de Juárez, se habían hecho serios intentos por conseguir la apropiación de las tierras comunales de algunos pueblos, pero con Díaz lo que habían sido meras intromisiones se convirtieron en verdaderas luchas sangrientas. Cuando México consiguió su independencia de España a principios del siglo XIX, se calcula que aproximadamente el 40 por 100 de toda la tierra dedicada a la agricultura en las regiones central y sur del país pertenecía a las comunidades rurales. Cuando Díaz cayó en 1911, sólo un 5 por 100 permanecía en sus manos y más del 90 por 100 de los campesinos mexicanos no poseían tierras. Aunque no existen estadísticas anuales que reflejen con exactitud la evolución de este proceso, en general se piensa que el ritmo de expropiaciones alcanzó su punto álgido en la época de Díaz.

Hubo entonces más incentivos que nunca para este tipo de expropiaciones, ya que el surgimiento de nuevos mercados para los productos agrícolas mexica-

nos, tanto en el exterior como en el interior del país, llevó a los hacendados a esforzarse por aumentar sus territorios para elevar el rendimiento. Algunos de los ejemplos más notables en los que el crecimiento masivo en la producción para el mercado fue paralelo a la destrucción económica de las comunidades rurales se dieron en las plantaciones de azúcar de Morelos y en las haciendas de henequén de Yucatán.

La formación de nuevos mercados no fue, de todos modos, el único incentivo para la expropiación de las tierras, ya que la especulación fue un motivo igual de poderoso. Mientras se llevaba a cabo la construcción del ferrocarril, o incluso en su etapa de planificación, el valor de las tierras a lo largo de su trazado se disparó y los especuladores de todas las calañas se lanzaron sobre ellas. Adquirir nuevas propiedades sin tener que pagar por ellas fue también un modo de aumentar la producción sin hacer inversiones a gran escala. Para muchos hacendados, éste podría haber sido el método más fácil de elevar la producción sin incurrir en gastos sustanciales.

Una hipótesis más discutible es la de que los hacendados destruyeran los pueblos para acabar con su independencia económica y de este modo obligar a sus habitantes a trabajar en las tierras de la hacienda. Aunque esta fue la finalidad que motivó de hecho algunas expropiaciones, su importancia se ha exagerado: sólo tres familias de los indios tarascos en el pueblo de Naranja, cuyas tierras habían sido expropiadas por la hacienda de Cantabria, trabajaban en la finca; todos los demás estaban empleados en otras haciendas que no habían participado en la expropiación. Además, hay datos suficientes para afirmar que la mayoría de las fincas podían encontrar los trabajadores que necesitaban sin tener que recurrir a la destrucción de la base económica de las comunidades vecinas. Una de las razones que explica la creciente disponibilidad de trabajadores es el aumento demográfico acaecido en los pueblos libres que había obligado a un número creciente de campesinos a buscar trabajo suplementario en las haciendas. Por otra parte, hay también evidencias que indican que cuando una hacienda expropiaba los terrenos de un pueblo vecino, la amargura y el resentimiento que la expropiación provocaba entre los campesinos eran tan profundos que la mayoría prefería trabajar en otras fincas antes que en la que había destruido su comunidad.

Durante la época de Díaz no sólo eran mayores que antes los incentivos para expropiar tierras, sino que además encontraron un nuevo soporte legal. A la Ley Lerdo (véase *supra*) que había constituido la base legal para estas acciones durante la República restaurada, se habían sumado nuevas leyes durante la legislatura de Manuel González, que permitieron a las compañías deslindadoras inspeccionar las tierras públicas y quedarse con un tercio de lo que encontrasen. Más importante aún que estas nuevas normativas legales fue el hecho de que durante el período de Díaz el gobierno mexicano era lo suficientemente fuerte como para encabezar un ataque masivo contra las comunidades rurales. Los ferrocarriles acabados de construir dieron al ejército y a los Rurales, recientemente reforzados, mayores posibilidades que antes de aplastar cualquier tipo de resistencia por parte del campesinado.

Las estadísticas existentes no son lo suficientemente fiables como para poder establecer con cierto grado de certeza cuándo se llevó a cabo el proceso de expropiación de la tierra y cuándo alcanzó su punto álgido, ni hay tampoco explica-

ción posible para aclarar la diversidad, a veces extrema, existente entre los distintos procesos regionales. ¿Por qué se expropiaron tantos pueblos indios en Yucatán mientras que en Oaxaca, zona en la que el porcentaje de indios era probablemente el más alto de todo México, las comunidades consiguieron conservar la mayor parte de sus tierras y muchos de sus derechos tradicionales? ¿Se debió al hecho de que la producción para la exportación era mucho más importante en Yucatán que en Oaxaca? ¿Qué función tuvieron otros factores, tales como la mayor cohesión de las comunidades indígenas en Oaxaca, la tradicional debilidad de la hacienda en este estado, la existencia de una clase media india, los lazos de tipo personal que unían a Díaz con el estado de Oaxaca? Son preguntas para las que todavía no hay una respuesta definida.

Un problema aún más complejo es el de tratar de establecer quiénes fueron los beneficiarios de estas expropiaciones. Durante mucho tiempo se ha venido dando una imagen demasiado simplista de lo que fue el resultado de las expropiaciones. Se presumía que, como resultado de los cambios acaecidos durante el período porfirista, la sociedad mexicana había quedado dividida en dos únicas clases: el grupo de los hacendados que eran cada vez más pudientes y el grupo de los peones sin tierras progresivamente empobrecidos.

Pero, en realidad, había una clase media agraria en proceso de desarrollo, cuya existencia no siempre es fácil de documentar, pero que parece que desempeñó un papel de progresiva relevancia en la evolución social que se estaba produciendo en el campo. En muchos pueblos, los campesinos ricos, los usureros y los hombres fuertes locales que no eran hacendados se beneficiaron tanto o más que éstos de la expropiación de las tierras de los campesinos. Muchos de estos personajes surgieron mucho antes del período porfirista. El aumento de la población en México había provocado profundas diferencias en el seno de las comunidades campesinas, y los habitantes más ricos se habían convertido en aliados de los grandes propietarios y de las autoridades porfiristas a la hora de expropiar terrenos. Algunos de ellos adquirieron propiedades de mediana extensión («ranchos») y así aparecen incluidos en los censos de 1895 y 1900, en los que se contabilizan 32.000 ranchos (aunque no todos eran unidades independientes puesto que algunos formaban parte de haciendas). Otros, en cambio, invirtieron su riqueza de manera más difícil de documentar estadísticamente. Algunos se transformaron en arrendatarios ricos, otros alquilaron ganado a los aparceros y a los arrendatarios más pobres. El censo de 1900 recoge 400.000 «agricultores», y puesto que no se especifica claramente cuáles son las características que definen esta categoría, probablemente se incluía en ella a la mayor parte de la clase media agrícola que constituía un sector fundamental dentro de la población rural mexicana. Sus relaciones con los habitantes del pueblo eran muy diversas; algunos se hicieron usureros, agentes de Estado o de los hacendados, mientras que otros se convirtieron en líderes populares. Algunos fueron pasando con el tiempo de una a otra categoría.

En el pueblo de Aneneuilco, en el estado de Morelos, sus habitantes eligieron a finales del verano de 1909 a un campesino relativamente pudiente, Emiliano Zapata, para que los representara en sus intentos por recuperar las tierras que la vecina hacienda del Hospital les había arrebatado. A cientos de kilómetros al norte en el pueblo fronterizo de Cuchillo Parado, sus habitantes también eli-

gieron a un líder, Ezequiel Montes, para que los ayudara a hacer frente al intento de uno de los más ricos hacendados de Chihuahua, Muñoz, de arrebatárles la tierra. Los dos, Zapata y Montes, disfrutaban de un estatus social más alto que la mayoría de los habitantes de estos pueblos. Zapata descendía de una familia conocida y estaba relativamente bien situado ya que poseía tierras, caballos y mulas; Ezequiel Montes no tenía los mismos antecedentes familiares. En la década de 1880 llegó a Cuchillo Parado como trabajador sin tierras, no llevando más que su guitarra, según escribió irrespetuosamente un cronista local. Pero Montes, evidentemente, tenía otras habilidades además de la de cantar: podía hablar muy bien, sabía leer y escribir, conocía bien el mundo que le rodeaba y pronto se ganó la confianza de los lugareños, que en 1903 le eligieron jefe de la Junta de Vecinos de Cuchillo Parado, que se había creado para combatir a Muñoz. En un principio Montes tuvo más éxito que Zapata. Mientras la hacienda del Hospital se quedó con las tierras que se habían apropiado, Muñoz abandonó su ataque en Cuchillo Parado.

Los dos líderes aprovecharon el poder y el prestigio que habían adquirido al mando de los intentos campesinos por lograr que se reconocieran sus derechos de formas muy diferentes: Zapata guió a los hombres de Aneneuilco y, finalmente, a todos los de Morelos, hacia la Revolución mexicana; Montes fue primero nombrado alcalde de Cuchillo Parado por las autoridades del estado, más tarde se convirtió en usurero y finalmente fue expulsado del pueblo el día en que estalló la Revolución.

Es posible que el surgimiento de esta clase media agraria proporcione una de las mejores explicaciones, aunque no la única, al hecho que durante mucho tiempo ha dejado perplejos a los historiadores: la relativa falta de resistencia por parte de los campesinos en el centro y sur de México contra la proliferación de tierras expropiadas. Aunque no hay duda de que el debilitamiento de la oposición campesina que se produjo en las décadas de 1880 y 1890, cuando se la compara con la del período entre 1876 y 1880, estaba ligado al creciente poder estatal, al reforzamiento del ejército y la movilidad que le permitía el ferrocarril y a la creación de nuevas unidades policiales, la represión por sí sola no proporciona una explicación satisfactoria. Junto al apoyo cada vez mayor que el gobierno consiguió por parte de la incipiente clase media, se dieron otros fenómenos que probablemente contribuyeron a debilitar la resistencia del campesinado. Uno fue el desmantelamiento de sus principales órganos de resistencia, la administración comunitaria del pueblo. Una vez destruida su autonomía, los campesinos ya no podían contar con la organización tradicional que les había guiado anteriormente en sus movimientos de oposición contra los terratenientes o contra el Estado. El otro fenómeno, quizá más importante aún, fue la transformación de la relación patrono-cliente que durante mucho tiempo había regido la vida en el campo mexicano. Durante la época colonial, el patrono era el Estado español que con frecuencia intentó proteger a los campesinos de los abusos de los terratenientes para impedir que éstos se hicieran demasiado poderosos. A principios del siglo XIX, los caudillos regionales, que dependían del apoyo de los campesinos en sus frecuentes luchas con los rivales de otras regiones, habían asumido la función del patrono. Cuando algunos hacendados en el estado de Guerrero intentaron expropiar tierras que pertenecían a pueblos libres, los campesinos llamaron en

su ayuda a Juan Álvarez, que era el hacendado más pudiente y el caudillo liberal más poderoso de la región. Álvarez, de hecho, los ayudó, lo cual determinó que miles de campesinos se unieran a sus tropas en 1855 cuando derrocó el gobierno conservador de Santa Anna. Álvarez no fue el único; otros caudillos, como el conservador Manuel Lozada en Tepic, atendieron también a las demandas de los campesinos. El Estado porfirista absorbió a muchos de estos trabajadores protectores del campesinado y después los volvió en contra de sus patronos. Al perder a sus patronos tradicionales, muchos campesinos se encontraron ciegos y abandonados. Por otra parte, el prestigio personal de Porfirio Díaz se ganó como los escasos intentos que hizo por ayudar a algunos pueblos pobres tal vez prevenir también el surgimiento de la oposición al gobierno por parte de los campesinos. Ciertos indicios muestran que, en alguna ocasión, Díaz intentó asumir el papel tradicionalmente desempeñado por el Estado colonial español como protector y patrono de los pobladores indios. A menudo, Díaz escribió a los gobernadores y funcionarios locales pidiéndoles que respetaran los derechos de propiedad de los indios sobre sus tierras, siempre que éstos pudieran mostrar los títulos de propiedad, o incluso respetar sus derechos *de facto*. Y así, en 1897 los habitantes de Tamazunchale le pidieron ayuda para impedir la expropiación de su tierra. Díaz les mandó buscar los títulos de propiedad de la tierra en los Archivos Nacionales y entonces escribió al gobernador del estado de San Luis Potosí:

Respecto a los indios de San Francisco, Matlapa y los demás, no puede haber duda de que ellos son los propietarios por concesión virreinal desde hace mucho tiempo, incluso si sus títulos tuvieran algún defecto o irregularidad; pero aun suponiendo que sus títulos fueran irregulares o nulos, ellos han sido considerados los propietarios de las tierras que ahora un extraño intenta comprar porque los indios carecen de los medios para pagarlas. El resultado sería una expropiación y la sustitución de estas comunidades indias por otras de extranjeros que vendrían a habitar los lugares que ellos dejaran, pero probablemente después de muchas escenas sangrientas que los indios considerarían como su justa venganza, al estar fanáticamente convencidos, con razón o sin ella, de sus derechos.⁵

De cualquier manera, estos principios estaban en contradicción con otros dogmas más profundos de la administración porfirista: el deseo de atraer capital extranjero y el deseo de estar en buenas relaciones con los hacendados. Díaz no estaba dispuesto o era incapaz de poner en práctica esta política de restricciones más allá de su intervención en unos pocos casos. Hasta los últimos años de su régimen no dio ningún paso que en la práctica pudiera haber frenado la pérdida de la tierra o de la autonomía de los pueblos.

En 1910 Díaz decretó una medida a nivel nacional que prohibía la venta de más tierras públicas. Esta medida, que de haber sido adoptada algunos años antes habría podido restringir de hecho las expropiaciones rurales, tuvo escasa repercusión, ya que para entonces algunas de las mejores tierras ya habían sido vendidas y adjudicadas. No será hasta el siglo XX cuando, por las razones que

5. Citado por Donald Fithian Stevens en «Agrarian policy and instability in Porfirian Mexico», *The Americas*, 39 (octubre de 1982), p. 161.

se exponen a continuación, surgirán nuevos patronos que llamarán a los campesinos a la revuelta, obteniendo el apoyo de éstos y constituyendo por fin una fuerza decisiva en la tormenta revolucionaria que estallará en México después de 1910.

La evolución del peonaje hacia la esclavitud o hacia la libertad

En muchas haciendas del centro y sur de México, el estatus de los trabajadores, generalmente llamados peones, estuvo sujeto a cambios no menos drásticos que los que padecieron en las comunidades libres en las que se llevaron a cabo las expropiaciones. Como la producción de cosechas de gran demanda se hacía cada vez más rentable, muchos hacendados empezaron a restringir los contratos de arrendamiento, ya que preferían emplear a trabajadores para que cultivaran las tierras de sus fincas. De ninguna manera se acabó con el sistema de arrendamiento, pero se arrinconó cada vez más a los arrendamientos en las tierras marginales donde estaban más sujetos que nunca a las fluctuaciones del tiempo. En otros casos, los contratos de aparcería, que eran, si cabe, aún más desfavorables para los campesinos, sustituyeron a los arrendamientos. La manera en que las haciendas llevaban a cabo esto está claramente ejemplificada en la evolución de los sistemas de aparcería en una hacienda cerca de Celaya en el estado de Guanajuato. Hasta finales del XIX había habido dos tipos de aparcería en la hacienda: los «medieros al rajar» y los «medieros al quinto». Los primeros tenían sus propios animales y aperos de labranza, y recibían el 50 por 100 de la cosecha; los medieros al quinto utilizaban los aperos y los animales de la hacienda y a cambio debían abonar el 50 por 100 de sus cosechas más una quinta parte del resto de la cosecha como pago por el uso de los instrumentos y los animales, de modo que se quedaban como mucho con el 40 por 100 de lo producido. A finales del siglo XIX esta hacienda empezó a limitar el número de medieros al rajar, adoptando la medida de no permitirles utilizar los pastos de la hacienda para alimentar a su ganado. A principios del siglo XX, sólo unos pocos privilegiados trabajaban todavía en esas tierras según el acuerdo del 50 por 100. Todos los demás se habían convertido en medieros al quinto.

Otra diferenciación se daba en el tipo de trabajador que los hacendados empleaban. En las zonas periféricas del norte y el sur del país, cuya población estaba más dispersa que en el centro, con frecuencia los hacendados se encontraron con verdadera escasez de mano de obra, y reaccionaron ante el hecho de muy diversas maneras. Mientras que en el norte el peonaje tendía a desaparecer, en las zonas del sur, especialmente en las plantaciones de henequén de Yucatán, el Valle Nacional, productor de tabaco, en Oaxaca, y las plantaciones de café de Chiapas, los trabajadores comenzaron a ligarse a las haciendas en condiciones de peonaje parecidas a la esclavitud. Los campesinos no podían abandonar las fincas hasta haber pagado todas sus deudas, y el hacendado se aseguraba de que estas deudas no pudieran ser satisfechas, sirviéndose del fraude, el aumento de los precios en la tienda de raya, y obligando a los campesinos a aceptar préstamos que no necesitaban. En Yucatán, en mayor medida que en otras partes de México, este tipo de peonaje se convirtió en institución. En 1901 un observador informaba de que

la manera legal de atar «criados» a la hacienda consiste en hacer un pago por adelantado, lo que significa en este estado que el trabajador que se va puede ser obligado a volver a la hacienda por la policía. Estos pagos por adelantado generalmente se hacen cuando un joven nacido en la hacienda llega a los 18 o 20 años y se casa. Entonces su dueño le da cien o ciento cincuenta, a veces doscientos pesos, para establecer su casa y las dos partes tácitamente establecen el acuerdo de que esta suma, así como otras que se le puedan adelantar después en caso de accidente o de enfermedad, nunca va a ser satisfecha. Este es el precio por el cual el joven yucateco vende su libertad.⁶

En los casos en los que el sistema no estaba tan bien establecido, se aplicaba la fuerza bruta.

En 1914 se invitó al representante particular de Woodrow Wilson en México, John Lind, y al comandante de la flota norteamericana en Veracruz, el almirante Fletcher, a que visitaran una plantación de azúcar en Veracruz, propiedad del norteamericano Sloane Emery, en la que todos los trabajadores eran contratados. John Lind comentó más tarde:

Los trabajadores que el gobierno había enviado ahí eran prácticamente prisioneros. El almirante Fletcher y yo vimos el espectáculo inusitado en el siglo XX de grupos de ocho o diez hombres diseminados entre el maizal, acompañados por un arreador, un cacique, un indio de la costa, alto y fornido, con un par de pistolas a la cintura, y un látigo negro de ocho o diez pies, siguiendo de cerca al grupo que excavaba, mientras al otro lado del campo, un hombre con una escopeta, con el cañón aserrado, los vigilaba. Estos hombres salían a trabajar en la mañana vigilados por estos capataces y por las noches eran encerrados en un gran tejabán. Tanto el almirante Fletcher como yo estábamos asombrados de que pudiera existir esa situación, pero existía.⁷

El aislamiento en el que se vivía en muchas zonas del sur, la falta de una industria que pudiera competir con los propietarios de las fincas por la escasa mano de obra existente, el fortalecimiento de las fuerzas policiales en las haciendas y de los órganos estatales hacían que fuera extremadamente difícil para los peones burlar a sus dueños. Estas medidas represivas se vieron reforzadas por la puesta en práctica del precepto «divide y vencerás»: se reunió en el sur a rebeldes yaquis de Sonora, vagabundos de la zona centro, culíes chinos y coreanos y allí los hacendados se aprovecharon de los antagonismos existentes entre unos y otros, y de todos en contra de la comunidad nativa maya, para evitar que surgiera la revuelta. Y, en general, los terratenientes triunfaron tanto en el aspecto económico como en el social y político: la producción se elevó, la resistencia fue mínima y la estabilidad resultante atrajo nuevos capitales e inversiones.

Las tendencias contradictorias existentes en el campo —mayor libertad e incentivos económicos junto con un aumento de la represión y la semiesclavitud—

6. Karl Kaerger, *Landwirtschaft und Kolonisation im Spanisches Südamerika*, 2 vols., Leipzig, 1901-1902, II, p. 637.

7. United States Senate Documents, Foreign Relations Committee, Investigation of Mexican Affairs, Informes y Audiencias del 66.º Congreso, 2.ª sesión, Documento del Senado n.º 285, 2 vols., Washington, 1920, II, p. 2.326.

que se manifestaban en las zonas periféricas del norte y el sur del país, también aparecieron en el centro. La razón fue que los factores que produjeron escasez de trabajadores y que desembocaron en un superávit de mano de obra afectaron a México central al mismo tiempo, aunque obviamente no siempre en las mismas regiones. Las expropiaciones de tierras de los pueblos y el aumento demográfico dieron origen a grandes masas de trabajadores desempleados que en muchas regiones fueron más que suficientes para cubrir las necesidades de las haciendas. En estos casos algunos hacendados descubrieron las ventajas de tener en sus haciendas a trabajadores libres y no a siervos.

En 1906, Manuel Brassetti, el administrador de la hacienda de Tochatlaco, informó de que

En esta finca había el sistema de peones de año, todos ellos adeudadísimos, flojos, borrachos, malos trabajadores y muy remilgosos; después de estudiar bien, determiné perder la suma de tres mil pesos que debían y desde hace dos años, la gente es semanera acasillada; cuando eran de año dejaban de trabajar el sábado antes de Semana Santa, toda la Semana Santa se embriagaban y con trabajo se lograba que salieran a trabajar el Martes de Pascua. Desde que son semaneros, trabajan el Lunes y Martes Santos y el Lunes de Pascua ya están en el trabajo. Así como los lunes antes no salía más que la mitad de la cuadrilla, en la actualidad muy raros son los que se quedan. En consecuencia, mi opinión es que dicho método o costumbre es defectuoso y se presta al continuo abuso de la gente, dándose lugar a que lo insulten a uno con sus suposiciones de la famosa «cargadilla». En la actualidad están más contentos, no están tutelados, saben que si trabajan, tienen raya y sí no, no. Y ellos mismos han llegado a convencerse de la bondad de este sistema, habiéndose llegado a dar el caso de que digan a los peones de otras haciendas: «vendidos, nosotros somos libres».⁸

En otras partes del centro de México, en cambio, la aparición de nuevas industrias, la construcción del ferrocarril y la necesidad que tenían los hacendados de contratar un mayor número de trabajadores para el cultivo de las cosechas de gran demanda, desencadenaron el efecto contrario y produjeron escasez de mano de obra. Esta escasez real o, a veces, imaginaria, llevó a muchos hacendados a mantener el sistema de peones por endeudamiento incluso cuando a veces era contraproducente económicamente y, probablemente, innecesario.

El surgimiento de una clase nacional gobernante

Durante el régimen de Díaz se produjo también una transformación significativa en el otro extremo de la escala social: la creación de lo que podría llamarse una clase nacional gobernante. Con excepción de la Iglesia, que siempre tuvo carácter nacional, la elite económica mexicana de principios del siglo XIX tenía un carácter fundamentalmente local o regional. Algunos de sus componentes eran terratenientes cuya riqueza se concentraba generalmente en uno o dos estados,

8. Biblioteca del Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana; Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo, México, 1906, pp. 144-145.

mientras que los miembros de la elite que vivían en Ciudad de México eran esencialmente comerciantes o «agiotistas», es decir, especuladores que obtenían sus principales ingresos de conceder créditos al gobierno y de especular con las finanzas gubernamentales. Había también pocos industriales, y ninguno de ellos controlaba industrias de gran envergadura. La mayoría de los mineros y comerciantes eran extranjeros.

Algunos miembros de la clase nacional gobernante que emergió durante el Porfiriato eran terratenientes regionales, pero habían empezado a extender sus actividades hacia otros sectores de la economía y hacia otras regiones del país. El clan Terrazas-Creel, que era probablemente el grupo más rico y poderoso del México porfirista, es el ejemplo más notable. Al empezar el Porfiriato, Luis Terrazas era uno de los hacendados más importantes del estado de Chihuahua y su yerno, Enrique Creel, era, además de un propietario pudiente, un financiero de mediana categoría en la zona. Al acabar el siglo, los dos hombres habían combinado sus actividades y habían expandido extraordinariamente el nivel de sus operaciones. Poseían plantas de procesamiento de alimentos por todo Chihuahua, controlaban el mayor banco del estado, y además un banco en la recién urbanizada región de Laguna, en el estado de Coahuila. Creel pertenecía al consejo de dirección de dos de los bancos más importantes de México, el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México. Terrazas y Creel actuaban como intermediarios para numerosas compañías extranjeras que deseaban hacer negocios en México, y Creel era el director de una de las empresas más importantes dentro de este grupo, la Compañía Mexicana Petróleo el Águila, cuyo propietario era sir Weetman Pearson (después lord Cowdray). Un caso parecido era el del ministro de Hacienda, José Yves Limantour, el hijo de un próspero comerciante francés, que ramificó sus empresas por muchos estados, adquirió contratos de tierras en Chihuahua y, al igual que Terrazas y Creel, perteneció a los consejos de dirección de muchas compañías mexicanas y extranjeras importantes que hacían negocios en el país.

La riqueza de la nueva clase gobernante provenía no sólo de la tierra que poseía, sino sobre todo de su papel como intermediaria de las compañías extranjeras. Cualquier empresa importante que quisiera hacer negocios en México se daba cuenta en seguida de que tener a estos hombres como abogados o, mejor aún, en su consejo de dirección, era el mejor medio de saltarse el papeleo y de solventar cualquier tipo de obstáculo económico o político ante su penetración en la economía mexicana. El sector más poderoso y articulado de esta nueva clase en el poder era el grupo conocido como los científicos, grupo de financieros, tecnócratas e intelectuales coordinado por Manuel Romero Rubio, ministro de Gobernación y suegro de Díaz, y tras su muerte, en 1895, encabezado por el ministro de Hacienda Limantour (véase *supra*).

Uno de los rasgos más característicos de la clase gobernante fue su orientación proeuropea, lo cual comentó muy licidamente el ministro alemán en México al escribir:

En opinión de ellos, el futuro político del país depende enteramente del desarrollo de la economía. Sin embargo, para lograrlo, el país requiere ayuda del extranjero, incluidos los Estados Unidos. México está, pues, destinado a convertirse cada

vez más en un campo de actividad para las empresas capitalistas de todos los países. Sin embargo, los cosmopolitas, aunque parezca paradójico, ven precisamente en esta dependencia económica la garantía de su independencia política, ya que dan por supuesto que los grandes intereses europeos que inviertan aquí constituirán un contrapeso al apetito anexionista norteamericano, y prepararán el camino para la completa internacionalización y neutralización de México. Tras bambalinas, pero encabezando al grupo de los cosmopolitas, está el señor Limantour, ministro de Hacienda. Sus aliados son los altos círculos financieros, así como altos funcionarios gubernamentales que tienen participación o intereses en compañías nacionales y extranjeras, senadores y diputados y, finalmente, los representantes locales del capital europeo invertido en México.⁹

Estas opiniones no se pueden explicar simplemente por el hecho de que los científicos representaban los intereses europeos, mientras que los otros miembros de la oligarquía mexicana representaban los norteamericanos. De hecho, los científicos actuaban como intermediarios tanto de las empresas europeas como de las norteamericanas. La razón por la que, sin embargo, preferían a los europeos antes que a los norteamericanos era precisamente porque ellos se habían convertido en una clase gobernante nacional, cuyos puntos de vista trascendían los límites regionales y asumían proporciones nacionales. El apoyo europeo, según creían ellos, era crucial para mantener la independencia de México. Por otra parte, no hay duda de que su función de intermediarios de los intereses europeos era muy diferente a la que representaron con respecto a los norteamericanos. Debido a su relativa debilidad en México, los europeos estaban más dispuestos que los norteamericanos a hacer concesiones efectivas a sus intermediarios mexicanos. Es significativo, por ejemplo, que la mayor compañía petrolera británica en México, el Águila, aceptara como socios, aunque con estatus inferior, a miembros de la elite nacional. Las grandes compañías petroleras norteamericanas en México, como la Doheny's Mexican Petroleum Company y la Waters Pierce Oil Company, esta última ligada a la compañía Standard Oil, nunca llegaron a tener ese tipo de asociación con miembros de la oligarquía mexicana.

Las simpatías que la clase gobernante sentía hacia Europa se vieron reforzadas por la alianza con otro grupo de origen europeo que hasta finales del siglo XIX rara vez se había asociado con los mexicanos: los comerciantes de origen europeo, principalmente franceses, y en menor número alemanes, que habían empezado a establecer sus industrias en México cuando las importaciones desde Europa se hicieron demasiado costosas debido a la caída del precio de la plata. Ellos pidieron y obtuvieron inversiones de capital por parte de la elite mexicana, y sobre todo de los científicos.

Como resultado de estas múltiples actividades, la actitud de esta nueva clase en el poder les pareció a muchos observadores esquizofrénica. En algunos aspectos, se mostraba absolutamente subordinada a los intereses extranjeros, mientras que en otros temas se expresaba con inesperados brotes de nacionalismo. Esta clase nacional gobernante y el papel predominante de los científicos dentro de ella fue origen de profundas divisiones dentro de la elite mexicana. Las elites

9. Documentos del despacho de Asuntos Exteriores alemán, Archivos del Despacho de Asuntos Exteriores en Bonn, México, vol. 17, Wangenheim a Bülow, 7 de enero de 1907.

regionales frecuentemente se oponían a ellos con el argumento de su situación privilegiada y apoyaba esta actitud el otro grupo que se autodenominaba «nacional», el ejército. No es mera coincidencia que Bernardo Reyes, que encabezaba la oposición de la clase alta a los científicos, fuera un general del ejército y uno de los militares más influyentes en México.

En general, los cambios y transformaciones que se produjeron dentro de la clase alta mexicana durante el régimen de Díaz pudieron haber sido la causa de las tensiones y los conflictos que surgieron entre ellos. Hasta finales del siglo XIX, el gobierno de Díaz consiguió controlar a estos grupos e impidió que alguno recurriera a la revuelta armada para la consecución de sus intereses. El régimen les ofreció tantas oportunidades para la acumulación de riqueza que, simplemente, tenían demasiado que perder en el caso de un levantamiento armado.

El surgimiento de un proletariado industrial

La modernización traída por el Porfiriato hizo crecer la clase trabajadora mexicana, transformó su estatus, sus condiciones de vida y su conciencia. El rápido crecimiento económico llevó consigo el aumento de los obreros industriales. Entre 1895 y 1900, el número creció de 692.697 a 803.294 (excluyendo a los empleados en los transportes y en el sector público). Estaban concentrados principalmente en la capital del país y en los estados de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, y además en los estados de la frontera norte.

Las condiciones en las que vivían variaban mucho. En la región petrolera las compañías ofrecían vivienda, construyeron algunas escuelas e incluso establecieron un servicio médico rudimentario, a cambio de lo cual se les exigía obediencia ciega. Los alcaldes de las ciudades petroleras estaban vendidos a las compañías petrolíferas que también controlaban las fuerzas policiales. Los sindicatos y las huelgas estaban prohibidos. En las fábricas textiles las condiciones podían ser mucho más duras: en la fábrica de Santa Teresa y Contreras, en la capital, no se pagaba a los obreros en metálico sino con vales que sólo servían para intercambiar en la tienda de la compañía y los trabajadores se quejaron de que había un recargo de 18 por 100 en todos los productos que allí se vendían. En la fábrica textil Hércules de Querétaro, los obreros planteaban quejas similares pero, sobre todo, se quejaban del arbitrario sistema de castigos establecido por la empresa: cualquiera que llegara un solo minuto después de las 5 de la mañana, hora de empezar el trabajo, podía ser despedido inmediatamente. No había ningún tipo de seguro médico, de accidente o incapacidad.

De todas maneras, hasta finales de siglo, las huelgas o cualquier otro tipo de movimiento de protesta por parte de los obreros industriales fueron muy escasos. Éstos no sólo estaban experimentando un aumento respecto al nivel de vida medio, sino que, aun siendo duras las condiciones, eran mucho mejores que en las haciendas de las que provenían muchos de ellos y mejores que en los pueblos en los que un gran número de campesinos habían perdido sus tierras. Además, el régimen de Díaz se propuso controlar activamente a los trabajadores industriales, propiciando organizaciones de trabajo tales como el Congreso Obrero y la Convención Radical, que mantenían estrechas relaciones con el gobierno. Estas

organizaciones repartían propaganda a favor de Díaz y en contra de las ideologías radicales; editaban dos periódicos que predicaban que «el respeto de una persona hacia la policía es el termómetro que marca el grado de civilización».¹⁰ En 1891, el Congreso Obrero instigaba a los obreros en contra de la celebración del Primero de Mayo.

Al mismo tiempo, estas organizaciones intentaron mediar en algunos conflictos entre trabajadores y empresarios, y ayudaron a crear sociedades mutualistas; es decir, organizaciones de ayuda al trabajador financiadas exclusivamente por las contribuciones de los propios trabajadores que les proporcionaban pequeñas ayudas a ellos o a sus familias en caso de accidente, incapacidad o muerte.

A finales de siglo, la actitud de la clase trabajadora hacia el Estado y hacia sus patronos sufrió un cambio paulatino. Uno de los factores que influyó y modeló en gran medida su manera de pensar fue el creciente contacto con los extranjeros. La mayoría de las empresas, especialmente las más grandes, eran de propiedad extranjera, e incluso en las mexicanas contrataban a extranjeros para ocupar los puestos de administrador. Poco a poco se fue desarrollando entre los obreros mexicanos un sentimiento de nacionalismo que se agudizó al comprobar que había dentro de su misma empresa obreros extranjeros que ganaban varias veces más que ellos. En concreto, este era el caso del ferrocarril, donde se confería situación de privilegio a los trabajadores norteamericanos tanto en lo referente a la posibilidad de acceso a determinados tipos de trabajos como en lo referente a los salarios.

Hubo, además, otro medio a través del cual los trabajadores mexicanos llegaron a establecer contacto con los trabajadores extranjeros: la emigración a los Estados Unidos. Miles de trabajadores, especialmente de los estados del norte, empezaron a cruzar la frontera bien para instalarse permanentemente, o bien para trabajar durante largas temporadas en las minas e industrias norteamericanas o en los ranchos. La discriminación a la que con frecuencia se vieron sometidos hizo que surgiera en muchos de ellos un fuerte sentimiento nacionalista; en otros, el nacionalismo estuvo ligado a la progresiva adquisición de una conciencia de clase que se materializó al ponerse en contacto con los sindicatos norteamericanos, especialmente con la organización radical Industrial Workers of the World (IWW).

Una de las grandes diferencias que existía entre la clase trabajadora industrial mexicana y sus colegas en los países industrialmente más desarrollados era la relativa debilidad del sector más privilegiado: el de los obreros especializados. Esto se debía, por un lado, al predominio de industrias extractivas y ligeras que requerían menos cantidad de obreros especializados que otro tipo de industrias, pero también al mayor número de extranjeros entre los trabajadores cualificados.

El sometimiento de la clase media

Uno de los grandes éxitos del régimen de Porfirio Díaz fue la habilidad que demostró para someter a la clase media compuesta por funcionarios del Estado,

comerciantes, intelectuales, oficinistas, artesanos y similares, que tradicionalmente había sido una clase rebelde y levantisca. Hasta finales de siglo, este sometimiento se llevó a cabo mediante el uso de cierto grado de violencia y represión.

Cuando Díaz volvió al poder en 1884, comenzó a suprimir gradualmente los derechos que durante su anterior mandato había otorgado a la clase media para conseguir su apoyo. Casi todos los partidos políticos independientes desaparecieron, las elecciones parlamentarias apenas existían y el Congreso, de hecho, perdió todo su poder. La prensa, que fue una vez dominio de los liberales, pasó a estar cada vez más controlada por el gobierno. Muchos sectores de la clase media aceptaron las restricciones impuestas a su poder y a su libertad sin manifestar ningún tipo importante de oposición al régimen, ya que, a cambio, el Porfiriato les ofreció oportunidades sin precedentes para prosperar económicamente. En muchos estados, en los que Díaz sustituyó a los caudillos en los que no confiaba por funcionarios leales a su régimen, surgieron nuevas oportunidades para que un gran número de individuos pertenecientes a la clase media, que habían quedado al margen, compartieran el poder local y regional.

Muchos miembros de la clase media mexicana estaban dispuestos a pagar un precio a cambio de la *Pax Porfiriana* y la prosperidad económica; otros, simplemente fueron asimilados por el régimen. Aquellos que no entraron al servicio del gobierno se beneficiaron del auge general de la economía. Sin embargo, el número de oponentes al régimen comenzó a crecer progresivamente, pues frente a los sectores de la clase media que salían beneficiados del sistema, había importantes sectores de esta misma clase que no habían sacado provecho o que empezaban a sufrir pérdidas económicas a finales de siglo.

Los grandes perdedores fueron los arrieros y transportistas locales, que se vieron desplazados por los recién construidos ferrocarriles, y los artesanos, que no pudieron competir con las nacientes industrias textiles. La principal oposición dentro de la clase media provino de los intelectuales insatisfechos, algunos de los cuales eran periodistas independientes como Filomeno Mata en Ciudad de México o Silvestre Terrazas en Chihuahua. Incluso la crítica moderada al régimen llevaba al cierre de periódicos y al encarcelamiento de sus editores (Filomeno Mata estuvo 34 veces en prisión).

Los maestros, cuyo número aumentó de 12.748 en 1895 a 21.017 en 1910, fueron especialmente activos en su oposición al régimen. Aunque las cifras muestran que hubo cierto desarrollo del sistema educativo en México durante la época de Díaz, muchos maestros creían que el gobierno estaba haciendo muy poco por educar al pueblo. De hecho, el porcentaje de analfabetismo no disminuyó durante el Porfiriato a pesar de que se construyeron nuevas escuelas, sobre todo en las grandes ciudades. La educación superior se mantuvo en un nivel de subdesarrollo y, en general, el número de estudiantes en el país apenas aumentó. La política educativa del gobierno y los bajos sueldos de muchos maestros no fueron las únicas causas de la oposición de muchos de ellos al sistema, también hay que tener en cuenta además el estrecho contacto que muchos maestros mantenían con la población rural, su fuerte sentimiento nacionalista y su resentimiento por la preferencia que el gobierno demostraba hacia las culturas extranjeras.

Mientras que la oposición de los intelectuales a la dictadura era un fenómeno más o menos natural, no se puede decir lo mismo de la oposición masiva de los

10. David Walker, «Porfirian labor politics: working class organizations in Mexico City and Porfirio Díaz, 1876-1902», *The Americas*, 37 (enero de 1981), pp. 268, 272.

comerciantes al régimen de Díaz. Los comerciantes, generalmente, no constituyen un sector social radical, y, sin embargo, al analizar las causas de la Revolución mexicana de 1910, Pablo Martínez del Río, vástago de una de las familias dirigentes del Porfiriato, atribuye el cataclismo revolucionario, en gran medida, al descontento de éstos. Las raíces del descontento estaban en el hecho de que en muchas ciudades los comerciantes debían competir o bien con los extranjeros o bien con clientes de la oligarquía que conseguían de las compañías extranjeras concesiones para administrar sus tiendas. Los pequeños empresarios que querían establecer fábricas o pequeños negocios dependían del crédito que les concedieran los bancos, que, o bien pertenecían a los extranjeros, o bien a los miembros de la oligarquía. En igualdad de circunstancias, estos bancos daban preferencia a los deudores con mejores relaciones.

LA CRISIS DEL PORFIRIATO, 1900-1910

A pesar de los profundos cambios sociales y económicos que desencadenó el régimen de Díaz y los antagonismos que estos cambios engendraron, hasta finales de siglo el presidente mexicano logró evitar de manera sorprendente que surgieran fuertes movimientos de oposición. Los levantamientos se habían limitado a las zonas periféricas del país y habían afectado o bien a los indios o bien a un número restringido de pueblos. En general, los obreros industriales eran dóciles y no se produjeron huelgas significativas. No surgieron grupos políticos de oposición a escala regional y menos aún a escala nacional. Así, tanto la elite mexicana como algunos estadistas extranjeros alabaron aduladoramente a Díaz por haber sabido mantener a raya a la oposición. Sin embargo, en el corto período de diez años, de 1900 a 1910, esta situación cambió drásticamente. Se desarrollaron movimientos de oposición a nivel regional, se registraron huelgas que afectaron a miles de trabajadores y surgieron tres movimientos de oposición a nivel nacional, dos de los cuales postulaban el derrocamiento del régimen por la fuerza.

La *Pax Porfiriana* se apoyaba en el hecho de que Díaz había logrado aniquilar, o al menos neutralizar, a los grupos y clases sociales que tradicionalmente habían liderado los movimientos revolucionarios en México: el ejército, la clase alta y la clase media. Sin ellos, las rebeliones que, a pesar de la maquinaria represiva del gobierno, protagonizó la clase baja fueron aplastadas fácilmente y nunca trascendieron del ámbito local. El viraje decisivo se produjo en la primera década del siglo xx y tuvo su origen en la progresiva incapacidad del régimen de Díaz para mantener el consenso entre las clases alta y media. La escisión más grave entre estos dos grupos se produjo en un momento en el que el descontento popular y la insatisfacción de los Estados Unidos con respecto al régimen de Díaz iban en aumento. Cuando los miembros de todos estos diferentes grupos y clases unieron sus fuerzas, estalló la Revolución mexicana y el régimen de Díaz fue derrocado.

No hubo una única causa para que los acontecimientos sufrieran este drástico giro. Una depresión económica de proporciones sin precedentes, cambios políticos a nivel regional y nacional, la creciente y cada vez más visible represión gubernamental, la lucha por la sucesión del presidente que envejecía, un resurgi-

miento del nacionalismo y la aparición de México como escenario de la rivalidad europeo-norteamericana, fueron todos factores que contribuyeron en primer lugar a destruir la *Pax Porfiriana* y posteriormente a acabar con el régimen.

Entre 1900 y 1910 el flujo de la inversión extranjera en México alcanzó proporciones extraordinarias. Llegó a acercarse a los 3.000 millones de dólares, un nivel tres veces superior al alcanzado durante los 24 primeros años del régimen porfirista. Esta nueva ola de inversiones desembocó en una brusca subida de los precios que posteriormente se vio acentuada por la decisión del gobierno de abandonar el patrón plata y adoptar el patrón oro. Como resultado de estos procesos se produjo una caída en picado de los salarios reales en muchas partes de México. La tendencia se acentuó cuando el *boom* dio lugar a una de las mayores crisis económicas que había conocido el Estado porfirista. En 1907-1908 una crisis cíclica en los Estados Unidos se extendió a México, provocando despidos masivos y la reducción de los salarios. Al desempleo interno se sumaron los miles de trabajadores que habían emigrado a los Estados Unidos y que habían sido los primeros despedidos cuando la recesión económica afectó al vecino del norte. La crisis económica estuvo acompañada por una crisis agrícola derivada de las malas cosechas, debidas tanto a sequías como a inundaciones. La crisis agrícola produjo escasez de alimentos y condujo a un aumento de los precios en un momento en que no sólo el salario real, sino incluso el nominal, se estaban reduciendo en el sector industrial.

En este punto se dejaron sentir en su plenitud las consecuencias derivadas del camino escogido por Díaz para lograr la modernización. El régimen no podía ni estaba dispuesto a ayudar a importantes sectores de la clase alta, a la mayoría de la clase media, ni a los sectores más pobres de la sociedad. El gobierno no sólo no ofreció ninguna reducción de impuestos a las medianas empresas que se habían visto profundamente afectadas por la crisis, sino que además permitió que la oligarquía, con su total aprobación, tratara de descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los sectores sociales más pobres, sobre los de la clase media y sobre los de los miembros de la clase alta que no estaban ligados estrechamente a los científicos. Durante el período de crisis se concedieron importantes exenciones fiscales a las empresas extranjeras y a la nueva clase gobernante nacional. Cuando los beneficios estatales empezaron a decrecer drásticamente debido a la disminución de la actividad económica, los científicos intentaron aumentar los impuestos a la clase media mexicana. Al mismo tiempo, los bancos controlados por extranjeros y por miembros de la oligarquía no sólo redujeron los créditos y aumentaron el interés de los préstamos, sino que comenzaron a cobrar las deudas pendientes a un ritmo acelerado.

El gobierno no hizo ningún intento por tratar de compensar la falta de créditos. La administración no hizo nada más que reducir algunas tarifas con el fin de estimular la importación de alimentos básicos. Como consecuencia de esta política, los empresarios de clase media padecieron graves dificultades económicas que en ocasiones les llevaron a la ruina, y se produjo además un descenso catastrófico del nivel de vida de grandes sectores de la población. La política seguida durante la crisis respondía, en parte, a la ideología del *laissez-faire* de la oligarquía porfirista, pero aun en el caso de que la administración Díaz hubiera estado dispuesta a hacer algo para aminorar los efectos de la crisis, su capaci-

dad para llevarlo a efecto era muy limitada. Los ingresos globales que el gobierno recibía, federales, estatales y municipales, suponían sólo el 8 por 100 del producto nacional bruto.¹¹ La crisis económica, aun siendo grave, no fue la única causa inmediata de la revuelta social de los años 1910-1920. Las contradicciones internas que finalmente provocaron la Revolución mexicana eran más profundas y más complejas que la simple dislocación producida por la crisis de 1907, aunque la crisis vino a acentuar los conflictos ya existentes dentro de la sociedad mexicana.

Un factor importante que contribuyó a la desestabilización del régimen durante sus últimos años fue el surgimiento de una fuerte oposición por parte de la clase obrera. Ésta se reflejó principalmente en la proliferación de huelgas, que tuvieron un alcance desconocido hasta el momento y que provocaron una represión oficial sin precedentes, y en la creación de un partido político de oposición de ámbito nacional con una fuerte inclinación hacia el anarcosindicalismo. Los orígenes de esta oposición obrera eran varios. En primer lugar, se había formado una clase obrera que no tenía orígenes campesinos, por lo que no comparaba su mala situación con la situación aún peor que existía en las haciendas y en los pueblos. Además, un mayor número de trabajadores había ido en algún momento a trabajar a los Estados Unidos. Allí habían podido apreciar que el proletariado norteamericano no sólo disfrutaba de un nivel de vida más elevado sino que también tenía derechos de asociación y además había sido influido por la ideología anarcosindicalista del IWW. El nacionalismo desempeñó un papel cada vez más importante en la toma de conciencia de los obreros que se enfrentaron no sólo contra los inversores extranjeros y sus administradores sino contra los trabajadores extranjeros.

La causa inmediata del descontento de los obreros fue el brusco descenso del nivel de vida experimentado entre 1900 y 1910. Incluso en el período de auge, hasta 1907, los salarios reales estaban erosionados por la inflación; entre 1907 y 1910 las condiciones empeoraron, sobre todo en el norte de México. En 1909, en Chihuahua, el cónsul alemán calculaba que los precios de los alimentos y productos básicos habían aumentado un 80 por 100, mientras que los salarios reales habían bajado en un 20 por 100. El resultado fue un descenso catastrófico del salario real de aquellos que todavía tenían trabajo, pues, para los miles que habían sido despedidos en el curso de la recesión, las condiciones eran, obviamente, mucho peores. Es interesante, sin embargo, comprobar que entre 1900 y 1910 los movimientos sociales más importantes protagonizados por los obreros mexicanos no tuvieron lugar durante la caída económica sino durante el auge inmediatamente precedente. De los tres mayores conflictos laborales que atrajeron la atención nacional en aquellos años, a saber: la huelga en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en junio de 1906; la huelga minera en Cananea, Sonora, en enero de 1907, y el movimiento de obreros ferroviarios en Chihuahua en 1908, sólo en la huelga de Río Blanco las reivindicaciones económicas eran las predomi-

11. John Coatsworth, «The state and the external sector in Mexico 1800-1900» (ensayo inédito). La estimación del producto nacional bruto se basa en Leopoldo Solís, «La evolución económica de México a partir de la Revolución de 1910», *Demografía y Economía*, 3/1 (1969), p. 4.

minantes. Incluso en esta huelga, las reivindicaciones sobre las condiciones laborales eran, cuando menos, igual de importantes. En los otros dos casos, el nacionalismo aparecía íntimamente ligado a las demandas de los trabajadores. Los mineros de Cananea se quejaban de que a los mineros norteamericanos se les pagaba más del doble por hacer exactamente el mismo trabajo que hacían ellos. Reclamaciones similares se podían escuchar en la huelga de ferroviarios en Chihuahua, en la que los huelguistas se quejaban de que los mejores puestos en el sistema de ferrocarriles de México se reservaban para los trabajadores y empleados norteamericanos. En la huelga ferroviaria se llegó a un compromiso limitado, pero las otras dos fueron sofocadas con una crueldad brutal que sobrepasó todos los límites conocidos durante los primeros años del régimen de Díaz. «Gracias a Dios que todavía puedo matar», se dice que exclamó Díaz, y ordenó en Río Blanco la ejecución despiadada de docenas de obreros textiles que habían pedido al presidente mexicano que actuara de árbitro en su conflicto con la empresa. Al mismo tiempo, se producía otro baño de sangre, aunque de menores proporciones, en Cananea, donde el resentimiento se reavivó con la llegada, desde el otro lado de la frontera, de cientos de norteamericanos armados para acabar con el movimiento minero.

Este tipo de represión masiva y a las claras había constituido la excepción más que la regla en los anteriores años del régimen. Díaz prefería negociar más que reprimir y las veces que utilizó métodos represivos trató de mantenerlo en secreto. Las características sin precedentes de estas matanzas, el alcance que tuvieron y la existencia de un partido nacional de oposición con orientación laboral convirtieron a Río Blanco y Cananea en palabras emblemáticas para cientos de miles de mexicanos, y llevaron a miles de ellos a simpatizar con el primero y más radical movimiento de oposición a escala nacional surgido durante el Porfiriato: el Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por intelectuales de provincia a principios de siglo. Este partido postulaba la vuelta a los principios sostenidos por las facciones radicales del movimiento liberal en la época de Juárez. La creciente represión por parte del gobierno contribuyó a producir un rápido giro a la izquierda, y el partido asumió pronto rasgos e ideología anarcosindicalistas. Sus líderes más destacados fueron los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, que dirigieron el partido desde su exilio en St. Louis. El periódico que publicaban, *Regeneración*, fue prohibido en México y tenía que introducirse ilegalmente desde los Estados Unidos. A pesar de este inconveniente, parece que en México se vendían más de 25.000 ejemplares por número y que tuvo un importante papel como inspirador de las grandes huelgas que estallaron en el país.

El PLM no sólo ejerció su influencia entre los obreros industriales, sino también entre ciertos sectores de la clase media. Para éstos, el conflicto con la administración de Díaz era, en parte, un conflicto de clase, y en gran medida, además, una lucha generacional. A los ojos de muchos jóvenes, el régimen de Díaz representaba a una sociedad dictatorial subordinada al capital extranjero, sobre todo norteamericano, lo cual era interpretado como una amenaza para la integridad y la independencia de México. Las oportunidades de movilidad social, según ellos decían, eran entonces menores que en la generación de sus padres. La generación anterior ocupaba aún los puestos en la burocracia federal y Díaz no parecía tener

intención de hacer ningún tipo de cambio de personal. Un ministro francés, honradamente preocupado, escribía a su gobierno en 1900:

a pesar de la paz que ahora reina en el país hay un descontento real ... en la base de ese descontento está un partido de jóvenes que, bajo el disfraz de su adhesión a unos principios, oculta su deseo de poder y ansía participar de los privilegios que éste proporciona. Abogados, jueces, ingenieros, escritores y periodistas constituyen la mayoría en este partido. Pretende hablar en nombre de toda la sociedad civil y declara que el actual régimen militar debe ser sustituido por un sistema de parlamentarismo y libre discusión.¹²

Las grandes empresas extranjeras que estaban introduciéndose en México no lograron proporcionar nuevas oportunidades ni vías de escape para los jóvenes mexicanos cultivados que no encontraban posibilidad de introducirse en el aparato burocrático federal o local. Los extranjeros preferían escoger a sus administradores entre las clases media y alta de su propio país. Los mexicanos que ocupaban cargos de alto nivel generalmente eran amigos, familiares o clientes de los socios mexicanos que además solían ser miembros de la oligarquía.

Esta frustración de la juventud culta mexicana de clase media no tenía sólo raíces económicas. Muchos de estos jóvenes estaban resentidos porque consideraban que la elite porfirista había aceptado a ciegas los valores y la cultura extranjeros. Para muchos, «la diplomacia del dólar», el aumento de la inmigración y de las inversiones norteamericanas en la zona norte de México reavivaban la amenaza de una nueva anexión por parte de los Estados Unidos. Estos temores se vieron además reforzados por las continuas demandas de anexión de México aparecidas en la prensa norteamericana.

El PLM tuvo éxito en la inspiración o fortalecimiento de una oposición a escala nacional contra el régimen de Díaz; sin embargo, su llamada a la realización de una revolución nacional fue desatendida. Estallaron una serie de revueltas locales, sobre todo en el norte del país, bajo el liderazgo de exiliados que habían regresado trayendo consigo armas y propaganda. Pero estos movimientos fracasaron no sólo porque con frecuencia carecían de coordinación sino además porque entre sus filas frecuentemente había infiltrados agentes del gobierno. La oposición que obligó a Porfirio Díaz a dejar el poder tuvo un carácter muy diferente e incluía desde hacendados disidentes hasta campesinos militantes. El nacimiento de este movimiento de oposición estuvo estrechamente ligado a los cambios políticos y sociales que se dieron tanto a nivel nacional como regional en los estados de Sonora, Coahuila y Chihuahua en la frontera norte, y en el estado central de Morelos.

A comienzos del nuevo siglo se produjo en México un profundo cambio político. Durante los últimos diez años de su mandato, Díaz había relajado la aplicación de su estrategia que tenía como lema «divide y vencerás», y que en los primeros años había contribuido considerablemente al fortalecimiento de su régimen. Hasta finales de siglo, Díaz había logrado establecer a nivel nacional y regional

12. Archivos del Ministerio de Exteriores francés, París, CC, Mexique, vol. 17, Blondel a Delcassé, 3 de diciembre de 1900.

un complejo sistema de equilibrios que evitaba que ningún grupo o camarilla consiguiera acaparar el poder. A nivel nacional, Díaz permitió y, en ocasiones, alentó la proliferación de grupos que rivalizaran con los «científicos». Su rival más influyente fue una alianza heterogénea de terratenientes norteros, hombres de negocios y militares, cuyo líder, Bernardo Reyes, era uno de los militares más poderosos al servicio de Díaz, que durante muchos años había sido comandante militar y luego gobernador de Nuevo León, y, de 1900 a 1914, secretario de Guerra. A nivel regional, los «caudillos» tradicionales que solían llevar las riendas del poder político y económico habían sido sustituidos por hombres que habían ascendido con Porfirio Díaz. Algunos de ellos habían llegado de otras partes del país y, por tanto, no estaban ligados por raíces a las tierras que iban a gobernar; otros eran los miembros menos poderosos de la elite local. Frecuentemente debían competir con sus predecesores, mientras se desarrollaban constantes luchas entre los grupos y camarillas de la oligarquía. Díaz era el gran árbitro que mantenía el precario equilibrio existente entre ellos. Hacia finales de siglo iba siendo cada vez más evidente que Díaz o bien ya no estaba dispuesto o bien ya no podía seguir aplicando con el mismo rigor que en los primeros años de su mandato esta estrategia que se iba haciendo cada vez más complicada.

A nivel nacional, los científicos presionaban a Díaz para que les concediera más poder, pero, sobre todo, querían que el presidente mexicano, que tenía ya más de 70 años, especificara claramente que, en caso de que él muriera, el sucesor sería un miembro de su grupo. El creciente poder económico y el éxito que había obtenido el grupo de los científicos en el manejo de la economía mexicana que logró aumentar los beneficios y elevar los tipos de interés en los créditos con el exterior, desempeñaron sin duda un papel importante a la hora de lograr influir en la actuación de Díaz. Igual importancia pudo tener el hecho de que los intereses extranjeros que cada vez invertían más en México querían algún tipo de garantía de parte del presidente mexicano en cuanto a que, en el momento de su muerte, se continuaría con la misma política que él había estado llevando a cabo. Desde su punto de vista, la mejor garantía que Díaz podía darles era la confirmación de que le sucederían en el poder los «científicos», grupo con el que ellos estaban estrechamente relacionados. En 1903, Díaz decidió que había llegado el momento de hacer un gesto decisivo para ganarse la confianza de los científicos y de los inversores y financieros extranjeros. Así, en 1904 eligió como vicepresidente a Ramón Corral, un miembro del grupo de los científicos procedente del noroeste de Sonora, lo cual significaba que Corral le sucedería en el caso de que él muriera antes de terminar su mandato. Fue una gran victoria para el grupo de los científicos, que además se vio subrayada por la destitución del cargo de ministro de la Guerra de su más poderoso rival, Bernardo Reyes. Al mismo tiempo, los científicos se propusieron mermar el poder económico y político de los miembros de la elite que se oponían a ellos. En el mismo Sonora, el gobierno del estado, intimamente ligado a Corral, arremetió duramente contra la oposición ejercida por los terratenientes, incluyendo a uno de los más ricos hacendados del estado, José María Maytorena. En Coahuila, Díaz obligó a dimitir al gobernador Miguel Cárdenas que gozaba del apoyo de un gran número de hacendados, e impidió la elección de otro terrateniente, Venustiano Carranza, que estaba respaldado por la mayoría de la clase alta del estado. La oposición

de Díaz a importantes sectores de la elite del noreste y la creciente hostilidad de éstos contra él podría haber estado fundada en los conflictos, cada vez mayores, que tenían con los intereses extranjeros. El conflicto más conocido de este tipo, pero de ninguna manera el único, concernía al clan Madero, la familia más rica y poderosa de la región de la Laguna, si no de todo el estado de Coahuila, que nunca había apoyado a Reyes, aunque uno de sus miembros más destacados, Francisco Madero, había intentado durante varios años crear una oposición política en contra de Díaz. En contraste con las familias Torres y Terrazas, los Madero nunca habían cooperado armoniosamente con las empresas norteamericanas y se habían hecho notorios entre estas compañías por sus mal encubiertas tácticas de confrontación. A principios de siglo, Francisco Madero había formado y encabezado una coalición de hacendados en la región de la Laguna para oponerse a los intentos de la Anglo-American Tlahualilo Company de monopolizar los derechos sobre el agua de aquella región que dependía de la irrigación. Cuando los Madero cultivaban guayula, un sustituto del caucho, habían chocado con la Continental Rubber Company. Otro conflicto se originó porque, antes de 1910, los Madero eran propietarios del único horno de fundición en el norte de México que no dependía de la American Smelting and Refining Company.

En Chihuahua la ofensiva de los científicos no estaba dirigida contra los hacendados disidentes, que apenas existían, sino contra los campesinos y contra importantes sectores de la clase media. Fue en este estado donde consiguieron uno de sus mayores éxitos, cuando uno de sus más poderosos asociados, Luis Terrazas, y su clan familiar obtuvieron el control absoluto sobre el estado. En 1903 se negoció una reconciliación entre el caudillo de Chihuahua y Díaz, ya que ambos habían combatido en bandos contrarios cuando Díaz se rebeló en 1871 y 1876. Con el respaldo de Díaz, Terrazas se convirtió de nuevo en gobernador de su estado natal en 1903, y de esta manera Chihuahua se convirtió en un negocio de familia, alternativamente gobernado por Luis Terrazas, su yerno, Enrique Creel, el hijo de Luis, Alberto y los candidatos nombrados por ellos. Su poder llegó a superar todo lo que sus predecesores hubiesen podido imaginar en la época anterior a Díaz. Cualquiera que deseara ocupar un cargo en el gobierno, ya fuera a nivel local o estatal, debía obtener el beneplácito de los nuevos detentadores del poder; cualquiera que se presentara a juicio debía apelar a jueces nombrados por ellos; cualquiera que necesitara un crédito tenía que recurrir a bancos que ellos controlaban; cualquiera que buscara empleo en una compañía extranjera probablemente tendría que depender de su mediación; cualquiera que fuera desposeído de su tierra por una compañía deslindadora o por un hacendado podría culparlos a ellos. La nueva oligarquía local no sólo había conseguido un poder sin precedentes sino que, además, se había librado de las restricciones y obligaciones que limitaban el poder de sus antecesores. Esto significaba que no estaban obligados a guardar ningún respeto a la autonomía municipal, y que ya no tenían ningún compromiso de protección de la población contra los ataques de los indios apaches o del gobierno federal. Este estado de cosas produjo una progresiva polarización de las fuerzas sociales y la amargura cada vez mayor de la clase media.

Los campesinos libres y los antiguos colonos militares sufrieron aún más que la clase media con el regreso de Terrazas al poder. Se empezó a construir a través

de las montañas de la región oeste de Chihuahua, donde estaban asentados la mayoría de los antiguos colonos militares, una nueva línea de ferrocarril, el Kansas Pacific Railroad. Como consecuencia, el valor de la tierra se elevó, y, dado que el gobierno ya no necesitaba a estos colonos como fuerza de choque contra los indios, Enrique Creel puso en marcha una campaña masiva para privarles de sus tierras. Se dictó una nueva ley agraria para el estado que establecía que las tierras municipales podrían venderse ahora al mejor postor. Como resultado, se empezaron a expropiar las últimas posesiones de las colonias militares. Los habitantes de una de las más antiguas y prestigiosas colonias militares, Namiquipa, escribían a Porfirio Díaz: «Si usted no nos concede su protección, vamos a perder nuestras tierras, por las que nuestros antepasados lucharon contra los invasores».¹³ En docenas de pueblos del estado, como San Andrés, Cuchillo Parado y Bocoyna, los habitantes protestaron en vano ante el gobierno central por la expropiación de sus tierras. Para los campesinos, que ya estaban empobrecidos por anteriores expropiaciones, la nueva ley de Creel suponía una amenaza para el hecho mismo de su existencia.

La ofensiva de los científicos y la crisis económica de 1907 crearon una situación única y sin precedentes en el triángulo norte formado por los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Esta región presentaba características excepcionales, ya que en ella importantes sectores de todas las clases sociales tanto hacendados, como clase media, obreros industriales, y colonos desposeídos, estaban unidos en su oposición al régimen de Díaz.

Existía en casi todo México una clase media descontenta y resentida porque había sido excluida del poder político, porque creía que sólo recogía las migajas del auge económico mexicano, y también porque los extranjeros estaban desempeñando un papel cada vez más importante dentro de las estructuras económicas y sociales del país. Pero en ninguna parte del país el crecimiento había sido tan rápido como en el norte, ni en ninguna había habido tantas pérdidas en tan poco tiempo. La clase media norteña no sólo estaba profundamente afectada económicamente por la crisis de 1907, que había perjudicado al norte más que a otras zonas del país, sino que además, desde el momento en que Díaz cedió el control político de estos estados a la oligarquía, y puso fin al sistema de dos partidos, esta clase media había sufrido también grandes pérdidas políticas, pues ningún partido de la oligarquía requería su ayuda.

Esta misma crisis económica afectó a la clase trabajadora industrial en un grado hasta entonces desconocido en el resto del país. Con la posible excepción de Ciudad de México, era en el norte donde se daba el mayor índice de desempleo obrero en vísperas de la Revolución. Se podían encontrar hacendados descontentos con alguna actitud política del régimen de Díaz en muchas partes de México (estaban especialmente descontentos con el modo en que los científicos habían intentado descargar el peso de la crisis de 1907 sobre otros sectores sociales), pero la mayoría tenían demasiado miedo a los campesinos, de cuyas tierras expropiadas ellos se habían beneficiado, para enfrentarse al sistema. Sin embargo, algunos hacendados disidentes en el norte de México, especialmente en Sonora

13. Departamento Agrario, Dirección de Terrenos Nacionales, Diversos, Chihuahua, Exp. 178, Carta de los habitantes de Namiquipa al presidente Porfirio Díaz, 20 de julio de 1908.

y Coahuila, no tenían tanto miedo. En Coahuila la mayoría de ellos estaban concentrados en el área de la Laguna, que había sido una tierra despoblada y desolada antes de que los hacendados la reclamaran. Estos hacendados, por tanto, no tenían que enfrentarse a una masa de campesinos a los que habían quitado sus tierras. Por otra parte, en esta zona existía un nuevo tipo de relación paternalista entre los propietarios y los peones, debido a que los peones en estos estados recibían salarios más altos y disfrutaban de un grado más elevado de libertad que en cualquier otro lugar del campo mexicano. Los hacendados trataron de fortalecer esta relación estableciendo escuelas y cuidados médicos para los trabajadores. Algunos terratenientes ilustrados, como Francisco I. Madero, incluso extendieron estos servicios a los peones no residentes para ganarse así su lealtad. En Sonora, José María Maytorena protegió a sus trabajadores yaquis de ser deportados por el gobierno federal y los trabajadores le consideraron como su patrón. Así, los tres estados del norte que habían sido el principal objetivo de la ofensiva de los científicos constituyeron la base más firme para los movimientos de oposición que surgieron en México entre 1907 y 1910.

En el estado de Morelos, el ataque de los científicos tuvo también hondos repercusiones, pero afectó principalmente a una sola clase social: el campesinado. El gobernador del estado, Manuel Alarcón, un caudillo tradicional que no formaba parte de la oligarquía local y que no sólo no era visto con antipatía por parte de los colonos, sino que todavía era considerado por una gran parte de la población como el hombre con el que habían podido contar en tiempos de crisis, había muerto en 1908. Fue reemplazado por Pablo Escandón, que pertenecía a la oligarquía terrateniente y que mantenía estrecha relación con los científicos. Como en Chihuahua, el poder quedaba ahora en manos de la oligarquía local, y para los pueblos libres el gobierno de Escandón fue un absoluto desastre. Al crecer la demanda de azúcar, los propietarios de plantaciones comenzaron a expropiar las tierras que les quedaban a los cerca de cien pueblos libres que componían el estado de Morelos. Los campesinos, muchos de los cuales habían considerado durante mucho tiempo al gobierno central como una especie de poder neutral al que ellos podían apelar, se sintieron en aquel momento completamente abandonados por el gobierno. Cuando el mito de la existencia en Ciudad de México de un gobierno benevolente, que actuaría en favor de los campesinos sólo con saber lo que realmente estaba pasando, se vino abajo con el nombramiento de un hacendado como gobernador del estado, los campesinos estuvieron listos para la revuelta. Junto a los estados norteños de Sonora, Chihuahua y Coahuila, Morelos se iba a convertir en uno de los centros principales de la Revolución de 1910.

En 1910, cuando se acercaba la fecha de realizar nuevas elecciones presidenciales, la lucha por la sucesión estalló de nuevo. Los miembros disidentes de la clase alta y de la clase media mexicana intentaron otra vez limitar la influencia de los científicos y convencer a Díaz para que eligiera como candidato a la vicepresidencia a una persona que no perteneciera a ese grupo. Su candidato era Bernardo Reyes y su organización política se llamaba Partido Democrático. Su influencia y su vigor aumentaron en gran medida como consecuencia de un importante error táctico cometido por Díaz en 1908. En una entrevista realizada por el corresponsal de un periódico norteamericano, James Creelman, Díaz pareció invitar a los candidatos a presentarse libremente a las elecciones, y en la entrevista

ta el dictador mexicano declaró que creía que México estaba ya maduro para la democracia, que él no se presentaría como candidato en las próximas elecciones presidenciales y que daba la bienvenida a los grupos políticos de la oposición. No está claro por qué Díaz declaró intenciones que no estaba dispuesto a llevar a la práctica, pero las consecuencias de estos comentarios fueron decisivas.

Los opositores al régimen creyeron que Díaz había dado el visto bueno de manera oficial a la existencia de un partido de oposición y que no serían castigados si lo ponían en marcha. Las autoridades quedaron desorientadas y por algún tiempo dejaron que tales grupos funcionaran con mucha más libertad de la que habían disfrutado hasta entonces. Pero cuando miles de personas, principalmente de la clase media, empezaron a manifestarse en apoyo de Reyes, Díaz declaró abiertamente que nunca le aceptaría como candidato a la vicepresidencia y le envió en misión militar a Europa. Frente a la disyuntiva de rebelarse o acatar la decisión presidencial, Reyes optó por doblegarse a la voluntad del dictador.

Tras el exilio de Reyes, los miembros de la clase alta que le apoyaban se vieron en una situación de difícil solución. Habían confiado en poder presionar y, quizás, incluso quitar el poder a Díaz con la ayuda de una coalición similar a la que le había llevado al poder hacía más de 30 años: una alianza entre los disidentes de la clase alta y media con los rebeldes potenciales dentro del ejército. El eslabón con el ejército era Reyes. Una vez que éste se sometió a Díaz, el eslabón se rompió y la opción militar desapareció. Cualquier otro intento serio de amenazar o derrocar a Díaz tendría que basarse en una estrategia completamente diferente; es decir, en una alianza con la clase baja de la sociedad, incluyendo a los campesinos. Para muchos de los seguidores de Reyes, especialmente del centro de México, esta era una opción inaceptable ya que temían que una vez movilizado el campesinado se volviera contra ellos y se convirtiera en una fuerza incontrolable. Consecuentemente, muchos se retiraron de toda oposición activa al régimen de Díaz.

Los hacendados disidentes del norte, especialmente en Sonora y Coahuila, como ya hemos visto, no sentían temor ante los campesinos; allí los antiguos seguidores de Reyes apoyaron a otro partido nacional de oposición que se estaba formando: el Partido Antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, un pudiente hacendado de Coahuila. Madero se convirtió en una figura nacional cuando en 1908 publicó un libro sobre la reelección presidencial. En él señalaba que el problema fundamental de México era el absolutismo y el poder ilimitado concentrado en un solo hombre. Sólo la introducción de la democracia parlamentaria, un sistema de elecciones libres y la independencia de la prensa y de los juzgados podrían transformar a México en un Estado moderno y democrático. El libro estaba escrito con mucha cautela, ya que por una parte criticaba duramente el sistema de Díaz, y por otra alababa las cualidades personales del dictador. De todas maneras se expresaba en contra de las excesivas concesiones hechas a los extranjeros y reprochaba a Díaz el haber sido demasiado blando con respecto a los Estados Unidos. Las cuestiones sociales apenas se mencionaban.

Algunos historiadores posrevolucionarios, y el propio Porfirio Díaz, consideraron a Madero como a un idealista ingenuo al tomar en serio la promesa de Díaz de celebrar en México elecciones democráticas. Madero juzgaba su propia

actitud desde un punto de vista diferente, como se puede comprobar por las afirmaciones que hizo en una entrevista que le hicieron en 1911:

Al principio de la campaña política, la mayoría de los habitantes de nuestra nación creían en la absoluta efectividad del voto como medio para luchar contra el general Díaz. De todas maneras, yo comprendía que sólo las fuerzas armadas podían derribar al general Díaz, pero para llevar adelante la revolución la campaña democrática era indispensable porque prepararía a la opinión pública y justificaría una rebelión armada. Nosotros pusimos en marcha la campaña democrática como si no tuviéramos la intención de recurrir a una rebelión armada; utilizamos todos los recursos legales y cuando estuvo claro que el general Díaz no iba a respetar el deseo nacional ... llevamos a cabo la rebelión armada ... [Díaz] me respetó porque, puesto que yo no era un militar, nunca creyó que fuera capaz de empuñar las armas contra él. Yo comprendí que ésta era mi única defensa y sin recurrir a la hipocresía logré fortalecer esta idea en su pensamiento.¹⁴

Cuando Madero formó su partido, Díaz no lo tomó en serio. Más aún, Díaz pensó que este nuevo partido serviría para dividir y debilitar al único grupo de oposición al que él realmente temía, el Partido Democrático de Reyes. Como resultado, en 1908 y parte de 1909 Madero tuvo relativa libertad para trabajar en su campaña presidencial. Este hacendado con inclinaciones filantrópicas consiguió hacer lo que el PLM no había logrado. A pesar de que su programa agrario era muy vago y nunca llegó a proponer el tipo de reforma agraria que los liberales prometieron, consiguió incitar y movilizar a importantes sectores del campesinado mexicano. Cuando los desilusionados seguidores de Reyes se unieron al partido, los antirreeleccionistas se convirtieron en el único grupo político en México que reunía en sus filas a miembros de todas las clases sociales, desde los ricos hacendados hasta los peones más humildes de las grandes haciendas. Esta heterogénea e inesperada coalición encabezada por un hombre sin experiencia militar fue la que consiguió derrocar el régimen de Díaz en 1910-1911.

Hay indicios, aunque no pruebas absolutas, de que cuando estalló la Revolución algunas corporaciones norteamericanas (sobre todo las que tenían intereses petroleros) la apoyaron activamente, al mismo tiempo que la administración Taft mostraba un grado de «tolerancia» hacia las actividades de Madero, lo que preocupó seriamente al gobierno de Díaz. Aunque las relaciones de los Estados Unidos con los revolucionarios en 1910-1911 son todavía tema de gran debate, no hay duda de que las relaciones de la administración de Díaz con el gobierno y con algunas empresas norteamericanas se habían hecho cada vez más tensas entre 1900 y 1910.

Tanto el gobierno mexicano como el grupo de los científicos estaban hondamente resentidos por las cada vez más frecuentes intervenciones de los Estados Unidos en América Central y el Caribe después de la guerra hispano-norteamericana. Les preocupaba el hecho de que, a finales del siglo, las medianas empresas que habían predominado entre los inversores en los primeros años del Porfiriato

14. Estos comentarios son parte de una entrevista que Madero concedió a la Hearst Press en 1911. Aparecen citados en Jerry W. Knudson, «When did Francisco I. Madero decide on Revolution?», *The Americas*, 30 (abril de 1974), pp. 532-534.

estaban siendo sustituidas por compañías norteamericanas más grandes y más poderosas. En 1902 el ministro austriaco en México comentaba:

El gobierno mexicano ha adoptado ahora formalmente una actitud en contra de los consorcios de empresas formados con capital norteamericano ... Han aparecido en periódicos semioficiales una serie de artículos que señalan los crecientes peligros que estas actividades intensivas de los consorcios representan para los productores mexicanos. Estos serán pronto esclavos del mercado monetario norteamericano.¹⁵

Díaz se negó a atender las demandas, fundamentalmente de la clase media, en favor de una actuación política de carácter más nacionalista, pero sí intentó contrarrestar la influencia norteamericana estimulando un aumento de la participación europea en México.

Estos esfuerzos del presidente y de los científicos obtuvieron una significativa respuesta en Gran Bretaña. Uno de los financieros más importantes del país, sir Weetman Pearson (lord Cowdray), que había trabajado en proyectos de obras públicas de México durante muchos años, se convirtió en el productor de petróleo más destacado del país a principios de siglo, poniendo en peligro la supremacía de los empresarios norteamericanos. El gobierno británico mostró un gran interés por el petróleo mexicano, actitud que corría paralela a sus esfuerzos por equipar a la marina británica con petróleo en lugar de con carbón. Por su parte, el gobierno mexicano hizo todo lo que podía al ofrecerles arrendamientos sobre las tierras del gobierno y contratos en exclusiva para hacer los suministros a los ferrocarriles controlados por el gobierno, cancelando otros contratos de suministro de petróleo que la administración anterior había firmado con la Mexican Petroleum Company de propiedad norteamericana.

Esta fue la medida antinorteamericana más dura que tomó el gobierno mexicano, pero no fue la única. El gobierno norteamericano se resintió enormemente del apoyo dado por Díaz al presidente nicaragüense Zelaya, al que ellos intentaban derribar, así como de la cancelación de una concesión para un establecimiento de carbón en la Baja California que el gobierno mexicano había acordado previamente con la marina norteamericana como un intento mexicano por atraerse a Japón. En general, los gestos antinorteamericanos del gobierno fueron de alcance limitado y Díaz hizo lo que pudo para que nunca se hicieran públicos. Como resultado, el régimen de Díaz se encontraba hacia 1910 en una situación paradójica: por una parte, su actuación le enemistaba cada vez más con las empresas norteamericanas y la administración en Washington, mientras que, por otra parte, la oposición mexicana consideraba que el gobierno era un satélite de los Estados Unidos. En último término esta paradoja contribuyó considerablemente a su caída.

15. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Viena, Politisches Archiv, Mexico Reports, 1902, Auerthal a Goluchowsky, 24 de noviembre de 1902.

El fin del Porfiriato

El 16 de septiembre de 1910 el régimen de Díaz parecía haber llegado al cenit de su poder. En este día de fiesta, embajadores de todos los países del mundo participaron en las suntuosas ceremonias organizadas para conmemorar el centenario del día en que el cura Miguel Hidalgo proclamó la independencia de México en el pequeño pueblo de Dolores. Parecía que Díaz había superado la mayoría de las dificultades que le habían atormentado durante los dos años anteriores. No sólo Reyes había partido al exilio, sino que Francisco Madero, al menos a los ojos de las autoridades porfiristas, había sido eliminado como fuerza política relevante. El 5 de junio de 1910, poco antes de las elecciones, se le había arrestado acusado de sedición. El 21 de junio se celebraron las elecciones en medio de masivas acusaciones de fraude por parte del Partido Antirreeleccionista. El gobierno declaró que la lista electoral de Díaz y Corral había resultado reelegida, y que ninguna candidatura de oposición había recibido suficientes votos como para ser miembros del Congreso. Se sofocaron algunas revueltas esporádicas a nivel local en Valladolid, en Yucatán, y en Veracruz, y el gobierno estaba convencido de que ahora tenía el completo control sobre la situación. Estaba tan confiado que el 22 de julio dejó a Madero libre bajo fianza. «Considero, como hacen la opinión pública y la prensa, que una revolución general es imposible» escribía a su gobierno con optimismo el enviado alemán en México, Karl Bünz, el 4 de diciembre de 1910.¹⁶

El 6 de octubre, Madero había escapado de San Luis Potosí, donde estaba bajo fianza en espera de juicio, y desde San Antonio, Texas, anunció un programa bajo el nombre del plan de San Luis Potosí. Acusando a Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas, Madero asumió el cargo de presidente provisional y convocó al pueblo a la revuelta el 20 de noviembre de 1910. Aunque su plan era de carácter esencialmente político, incluía una cláusula en que se prometía la devolución de las tierras injustamente confiscadas a las comunidades rurales.

La revuelta no se materializó en Coahuila, el estado natal de Madero en el que él había puesto todas sus esperanzas, y el intento de rebelión llevado a cabo por Aquiles Serdán, el líder del Partido Antirreeleccionista en Puebla, fue aplastado por las autoridades porfiristas. Pero para sorpresa tanto de Díaz, que había tomado posesión el día 1 de diciembre, como de Madero, el movimiento popular estalló en las montañas del oeste de Chihuahua, y bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa, los revolucionarios pronto se hicieron con el control de gran parte del estado.

El 14 de febrero de 1911, Madero cruzó la frontera y asumió el liderazgo de los revolucionarios de Chihuahua. Entre febrero y marzo las revueltas locales se empezaron a extender por todo México. Emiliano Zapata encabezó una rebelión campesina en Morelos, mientras Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y Calixto Contreras se levantaban en la Laguna. Se produjeron revueltas de menor envergadura por todo el país, y hacia el 21 de abril de 1911 la mayor parte del

campo mexicano estaba en manos de los revolucionarios. En mayo los rebeldes conquistaron la primera gran ciudad, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. En marzo, el prestigio de la administración Díaz había sufrido un duro golpe cuando el presidente Taft movilizó a 20.000 hombres a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana y envió barcos de guerra norteamericanos a los puertos mexicanos. Aunque el gobierno norteamericano afirmaba oficialmente que la movilización pretendía reforzar las leyes de neutralidad, era obvio que aquel no era un movimiento neutral. En México, la población se atemorizó ante la perspectiva de una intervención norteamericana, y aumentaron las presiones, incluso por parte de los colaboradores más cercanos a Díaz, en favor de su dimisión y de la firma de un compromiso con los revolucionarios. El 21 de mayo de 1911, Madero y el gobierno federal firmaron el tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo, y el nombramiento de Francisco León de la Barra, que no había participado en la Revolución, como presidente provisional. El gobierno provisional convocaría elecciones en octubre de 1911, y mientras tanto se disolvería el ejército revolucionario. Muchos seguidores de Madero se opusieron firmemente al tratado pensando que se renunciaba a una victoria inminente; sin embargo, Madero aceptó las condiciones y en los meses siguientes colaboró con el gobierno provisional para ponerlas en práctica, especialmente haciendo todo lo posible por lograr la disolución del ejército que le había proporcionado la victoria. Después de alguna vacilación, incluso respaldó los esfuerzos realizados por el gobierno provisional para desarmar por la fuerza a los revolucionarios de Morelos, encabezados por Emiliano Zapata. En muchas partes del país, los revolucionarios depusieron las armas pacíficamente, convencidos de que, una vez que Madero ocupara el cargo de presidente, se llevarían a cabo los cambios sociales por los que ellos habían luchado. El 15 de octubre de 1911, Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría en las elecciones probablemente más limpias que el país había tenido en toda su historia. Juró su cargo el 6 de noviembre de 1911 firmemente convencido de que la Revolución mexicana había concluido, habiendo cumplido, desde su punto de vista, sus objetivos.

16. GFO Bonn, Mexico I, vol 25, Bünz a Bethmann-Hollweg, 4 de diciembre de 1910.